



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

La Coordinación de Parentalidad:
protección del menor en los divorcios/separaciones
de alta conflictividad.

The Parental Coordination:
protection to the children in a high conflict
divorces/separations

Autor/es

Carmen De Pedro Bonet

Director/es

Alessandro Gentile

Facultad de ciencias sociales / Grado en Trabajo Social
2017/18

Resumen.

El presente epígrafe se basa, por un lado, en analizar el proceso de coordinación de parentalidad, que surgió en los años 90 en Estados Unidos. Consiste en un proceso que se orienta exclusivamente en la protección del menor a los impactos emocionales que pueden causarles los divorcios o separaciones de alta conflictividad. Con el objetivo de constatar los beneficios que podría conllevar su implantación en los juzgados de la Comunidad Autónoma de Aragón, España. Por otro lado, se propondrá al trabajador/a social para ejecutar el rol de coordinador de parentalidad. Exponiendo que formación adicional requerirá para desarrollarse como profesional idóneo.

Abstract.

This synopsis is based, on the one hand, on analyzing the parental coordination process which came up in the '90s in the United States. It consists of a process that is focused exclusively on the minor's protection to the emotional impacts that divorces or highly conflicting separations can cause them. This process is carried out with the aim of verifying the benefits that its implementation in the courts of the autonomous community of Aragón (Spain) could entail. On the other hand, the social worker will be proposed to execute the parental coordinator role. In addition, it will be important to explain what additional training will be required to develop as a suitable professional.

Palabras clave.

Interés Superior del Menor; divorcio y/o separación; alta conflictividad; plan de parentalidad; Gestión de conflictos.

Key words.

Best interest of the child; divorce and/ separation; high conflict; parenting plan; conflict management.

Índice:

1. Introducción.....	4
2. Marco Teórico.....	5
2.1. La mediación como vía alternativa de resolución de conflictos	
2.1.1. Orígenes de la mediación	
2.1.2. Principios éticos de la mediación	
2.1.3. Ventajas y beneficios que reporta la mediación	
2.1.4. Cuando la mediación es útil y donde se encuentran sus límites.	
2.1.5. Rol de la persona mediadora	
2.1.6. Ámbitos de actuación de la mediación. La Mediación familiar.	
2.2. Recursos judiciales para gestionar los conflictos post-ruptura	
2.2.1. Derivación judicial a terapia familiar o mediación familiar.	
2.2.2. Derivación a Coordinación de parentalidad	
3. Plan de investigación.....	19
3.1. Objetivo general	
3.2. Objetivos específicos	
4. Análisis.....	23
4.1. Legislación.	
4.2. Formación profesional del coordinador de parentalidad.	
4.3. Nulidades, Separaciones y divorcios en España.	
4.4. La conflictividad parental y sus consecuencias en los menores.	
4.5. Experiencia Estadounidense y Catalana.	
4.6. Estudio de un caso práctico	
5. Conclusiones.....	41
6. Bibliografía.....	44
7. Índice de tablas y de gráficos.....	47

1. Introducción.

La familia como una institución social y viva, es y ha sido constantemente el centro de muchas y diversas problemáticas que no siempre han logrado resolverlas por sí mismas. Los canjes sociológicos que ha experimentado la familia durante las últimas décadas, con la aparición de nuevos modelos familiares, la regularización de la separación y el divorcio y su aceptación social, han constituido un aumento significativo del número de separaciones parentales.

La judicialización de los conflictos ligados a la separación parental influye en la calidad de vida de las familias y en el bienestar de los hijos, en especial en la de los menores. Ellos son las principales preocupaciones que aparecen a la hora de afrontar una separación. La ruptura de sus progenitores puede producirles un gran impacto emocional y psicológico. Esto dependerá en gran medida en como los padres gestionen este gran cambio.

En los casos en los que el conflicto post-ruptura se cronifica, los jueces pueden emplear recursos judiciales no contenciosos, como lo son el Punto de Encuentro Familiar o el servicio de Mediación Familiar, para ayudar a los progenitores a poner fin a sus discrepancias por el bien de sus hijos. Pero, ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que existe alta conflictividad entre los progenitores? ¿Los recursos anteriormente nombrados, se encuentran capacitados para prestar asistencia a estas familias?

Estados Unidos desarrolló la coordinación de parentalidad, para aquellos progenitores que desarrollaban una alta conflictividad post-ruptura y que los recursos hasta entonces existentes no eran suficientes para ayudarles a poner fin a sus conflictos. La Intervención se encuentra exclusivamente orientada a salvaguardar el interés de los menores afectados. La práctica de la coordinación de parentalidad se ha extendido a distintos países del mundo, entre ellos Canadá, Argentina, Australia, Italia, Suiza. En España, la Comunidad Autónoma de Cataluña es pionera en la implantación de la coordinación de parentalidad, además ha servido como referencia para su desarrollo en otras Comunidades Autónomas (País Vasco, Galicia, Valencia, entre otras). En Aragón comienza a interesarse en desarrollar su práctica, dándose ya la existencia de un caso derivado a coordinación de parentalidad.

El objetivo del presente epígrafe consistirá en estudiar el proceso de Coordinación de Parentalidad y poder comprobar las ventajas y beneficios que tiene fomentar su práctica en los juzgados de Aragón. Así como, la formación adicional que requerirá un trabajador social para poder ser el profesional idóneo, para llevar a cabo la coordinación de parentalidad con éxito.

Se desarrollará la investigación tomando como referencia la experiencia de los Estados Unidos y los resultados obtenidos hasta ahora en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se comenzará partiendo desde cero, explicando y desarrollando la vía alternativa de resolución de conflicto, la mediación, ya que la coordinación de parentalidad encuentra su base en ella. Se continuará, exponiendo la metodología del propio proceso de coordinación y realizando un análisis, basado en los resultados experimentados en Estados Unidos y Cataluña, incluyendo ejemplos de caso. Por último, se desarrollarán las conclusiones a las que se han llegado tras la elaboración del trabajo, dando respuesta a las preguntas planteadas.

2. Marco teórico.

2.1. La mediación como vía alternativa de resolución de conflictos.

“El conflicto es una situación de confrontación de dos o más protagonistas, entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses” (Fernández, 1999).

La sociedad está constituida por individuos sociales que se encuentran relacionándose e interactuando de manera constante entre ellos. De esa interacción brotan frecuentemente conflictos de mayor o menor gravedad.

El conflicto es un elemento inherente al ser humano. De forma continua se encuentran inmersos en distintas controversias. Los conflictos no tienen por qué involucrar violencia o agresividad, pero si pueden inducir malestar o nerviosismo. Es realmente importante detectar los conflictos y analizarlos, así como buscar la forma más adecuada de resolverlos y ponerles fin.

*Ury¹ y sus colaboradores (1993) establecieron tres grandes vías para resolver las disputas provocadas por los conflictos: Reconciliar los intereses de las partes; determinar quién tiene más derechos; y determinar quién es más poderoso.

Regularmente, resulta menos dispendioso y conlleva efectos más satisfactorios reconciliar los intereses de ambas partes, que determinar quién tiene más derechos o quién es más poderoso.

Existen las denominadas Vías ADR (*Alternative Dispute Resolution*), las cuales son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. De estas vías, la mediación tiene por objeto ayudar a las partes a pasar de las posiciones de poder o de derecho a centrarse en los intereses y necesidades.

2.1.1. Orígenes de la mediación

La mediación *“es el proceso de comunicación entre partes en conflicto con la ayuda de un mediador imparcial, que procurará que las personas implicadas, puedan llegar por ellas mismas, a establecer un acuerdo que permita recomponer la buena relación y dar por acabado, o al menos mitigado el conflicto, que actúe preventivamente o de cara a mejorar las relaciones con los demás.”* (Vinyamata, 2006)

Los orígenes de la mediación se encuentran en el propio origen del hombre, es tan antigua como lo es el conflicto. Sin embargo, la mediación que como tal se conoce hoy en día comenzó a emplearse debido a un conjunto de factores sociales, políticos y económicos que empezaron a darse en los EEUU en la década de los treinta. Con el *New Deal* comenzó a emplearse la mediación laboral, y más tarde en los años 60, también en EEUU, surgió otro conflicto generalizado en el que se empezó a emplear la mediación comunitaria; además la aparición del divorcio no culpable en ciertos estados, promulgo la mediación familiar.

¹ William Ury es cofundador del Programa de Negociación de la Universidad de Harvard y director del Internacional Negotiation Network, organismo que actúa como intermediario en negociaciones internacionales de gran complejidad.

El cúmulo de múltiples sucesos, como los anteriormente nombrados, ayudaron a que se produjera el nacimiento del <<movimiento ADR>>, lo que quiere decir que el empleo de la mediación y de otras alternativas de resolución de conflictos, comenzaron a verse como la mejor alternativa para optimizar el acceso a los tribunales. Desde ese momento, la mediación comenzó a ser objeto de regulaciones hasta que surgió el *Uniform Mediation Act*² de 2001, en EEUU; de ahí llegó a Reino Unido, dando pie a su expansión por Europa.

Existen tres distintos modelos de mediación, entre ellos se dan diferencias desde las bases conceptuales que emplean, los métodos utilizados, los objetivos que persiguen, hasta el rol que desempeña el propio mediador. Los modelos existentes son: Modelo Lineal o Harvard, modelo Transformativo y modelo Circular-normativo.

El arte de mediar se encuentra establecido en la sociedad desde la creación de la misma, la mediación busca transformar una situación de confrontación en una de colaboración. Su objetivo es que las partes involucradas en el conflicto se guarden respeto, conversen, piensen posibles soluciones y participen en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. La mediación se está transformando en una vía de democratización y de colaboración ciudadana en poblaciones modernas, cuya moralidad se relaciona con el poderío de la comunicación y del dialogo social.

No la totalidad de los conflictos que surgen entre individuos en la sociedad, son mediables. En caso de que el conflicto no pueda ser solucionado mediante la vía de la mediación, habrá que recurrir a otras vías de resolución de conflictos.

2.1.2. Principios éticos de la mediación

La mediación se fundamenta en cuatro principios éticos que han de cumplirse en todo momento y será el profesional, que lleve a cabo la mediación, quien habrá de hacerse responsable de que no se vulneren:

- **Voluntariedad:** el proceso es voluntario tanto para los actores como para el profesional, por lo que podrá ser abandonado y finalizado cuando así lo solicite cualquiera de ellos. Un conflicto no podrá ser mediado con la falta de voluntariedad de los actores implicados.
- **Imparcialidad:** resulta fundamental que el mediador mantenga la imparcialidad con respecto a los actores involucrados, de tal forma que sea capaz de garantizar la igualdad entre ellos. No habrá de posicionarse por ninguna de las partes en ningún momento.
- **Neutralidad:** el mediador no tomara decisiones ni las juzgara, se limitará ayudarles a que por ellos mismos lleguen a las soluciones.
- **Confidencialidad:** durante el proceso tanto las partes como la persona mediadora mantendrán la privacidad más absoluta. No se podrá emplear la información obtenida en las sesiones ante ningún profesional, entidad o institución, salvo en particularidades recogidas por la ley.

En caso de que, por alguna circunstancia, alguno de los cuatro principios nombrados pueda correr el riesgo de ser vulnerado, habrá de darse por acabado el proceso de mediación.

² Ley uniforme de mediación, aprobada en 2001 por la Conferencia Nacional de Comisarios sobre Derecho Estatal Uniforme, en Estados Unidos.

Los principios que se acaban de señalar, son en los que la mediación se fundamenta primordialmente, pero también comporta otros principios que marcan el proceso como la libertad y seguridad; el poder es ejercido por las partes; la transparencia; el respeto a derecho; la flexibilidad; y la buena fe, colaboración y mantenimiento del respeto entre las partes.

2.1.3. Ventajas y beneficios que reporta la mediación

La ventaja más destacable, es la orientación de la mediación a transformar las relaciones entre los individuos implicados en el conflicto. Asimismo, su persecución de alcanzar acuerdos que permitan desagrar los diferentes intereses subyacentes de las partes. La mediación promulga que los acuerdos entre las partes sean duraderos en el tiempo, poco dispendiosos y que los propios implicados los perciban como justos y satisfactorios para ellos.

Se dan otras características que marcan a la mediación como un proceso ventajoso para la resolución de conflictos. Entre ellas se encuentran, la oportunidad que brinda a los actores del conflicto de poder ser escuchados, desahogar sus emociones, poseer el control sobre el proceso y los resultados, lo que les reporta mayor percepción de equidad sobre los resultados.

La mediación reporta numerosos beneficios a aquellos individuos que optan por recurrir a ella. Promulga el respeto, la tolerancia y la voluntariedad. Permite a los propios actores del conflicto formar parte de la solución que se crea, lo que permite mayor legitimidad en el acuerdo que se establezca. Fomenta la adquisición de habilidades y conocimientos para aprender a gestionar futuros conflictos que puedan surgir. Crea consciencia de responsabilidad en las personas. Apuesta por la solución de ganar-ganar y tiene visión de futuro. Es eficaz, rápida y asequible económicamente.

Optar por dicha vía, permite a los individuos crear, por si mismos, soluciones que pongan fin a su conflicto y mantener en todo momento el control del proceso. Este hecho, produce el efecto de que los propios actores sientan la solución como algo propio, lo que creará mayor compromiso con el resultado y que este sea más duradero en el tiempo. Además, les permite aprender a gestionar conflictos futuros en los que se puedan ver involucrados y ello facilitará la prevención de los mismos.

2.1.4. Cuando la mediación es útil y donde se encuentran sus límites.

La mediación no siempre es una alternativa útil para la resolución de conflictos. Se dan situaciones en las que no se considera la mejor opción para poner fin a las controversias de un determinado conflicto.

Como vía de resolución de conflictos, puede ser útil cuando uno de los actores o ambos prevalecen en alguna situación semejante a: los actores del conflicto quieren evitar el proceso judicial; desean poseer el control sobre el modo en el que se pondrá solución a su conflicto; buscan soluciones rápidas; disminuir los costes del proceso; o desean que el conflicto sea de carácter confidencial.

Se pueden dar situaciones en la que la mediación no se considera una vía de resolución de conflictos útil. Pueden darse cuando: uno de los actores exhibe un argumento de principios y se ampara en él; uno de los

actores desea comprobar la verdad de los hechos y adquirir una opinión neutral de los hechos; uno de los actores no tiene ambición real en resolver la controversia; Se desea implantar un precedente real; o uno de los actores sufre problemas de salud mental.

El proceso será útil ante la resolución de un conflicto, primordialmente, cuando los propios individuos deseen ponerle fin y acercar posturas

Existen límites que el propio proceso de la mediación no puede traspasar. No puede ser un sustituto de la práctica legal. Cuando se den casos en los que alguno de los actores no pueda asistir a las sesiones o no participe. Aquellos casos en los que el conflicto no sea mediable. Casos en los que se requiera un especialista en salud mental por problemas de uno de los actores. Así como, en los casos en los que existan precedentes de violencia explícita.

2.1.5. Rol de la persona mediadora

La persona responsable de que los principios éticos, anteriormente descritos, no se vulneren durante el proceso de mediación es el mediador/a. Este actor es denominado como el “tercero neutral”. El mediador/a desempeña un rol de no poder, facilita el acuerdo. Sus competencias más destacadas son: reducir las tensiones entre las partes; facilitar la comunicación entre ellas; ayudar a formular propuestas positivas y acuerdos. Asimismo, emplear la escucha para promover la reflexión de las personas sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en las soluciones propuestas por las partes y derivar aquellos casos, en los que la mediación no sea la vía más adecuada, a otros profesionales.

Bosque (2002), definió a la persona mediador/a como *“aquella que contribuye a disminuir las hostilidades, a mejorar la comunicación, a renovar las relaciones interpersonales, fomentar el pensamiento creativo y a modelar el trabajo cooperativo para llegar a generar consensos”*.

El mediador/a requiere de diversas actitudes para poder ayudar a las partes involucradas en el conflicto, entre ellas se hallan: la capacidad de escucha y de empatía; la capacidad de síntesis y de fomento de soluciones creativas; la imparcialidad; el optimismo; la habilidad de transferir serenidad; la confidencialidad; la ética; y la posesión de conocimientos de conflictología.

Según la Ley 5/2012³, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles podrán ser mediadores, aquellas personas que posean un título universitario o de formación superior y que cuenten con una formación específica en mediación. La formación específica podrá ser adquirida en cualquiera de los centros o instituciones debidamente acreditados, a través de la realización de cursos. Una vez, cursado el curso, el título de mediador tendrá validez en todo el territorio nacional.

2.1.6. Ámbitos de actuación. La mediación familiar.

Existen distintos campos en lo que aplicar la mediación. Estos pueden agruparse en función de si la clasificación es referida a la naturaleza jurídica de los conflictos o a la naturaleza intrínseca de los conflictos.

³ Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, de 7 de julio de 2012, pp. 10. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf>

En función de a que clasificación se haga referencia, se encuentran los siguientes campos de actuación de la mediación:

- Clasificación referida a la naturaleza jurídica de los conflictos: Mediación en materia civil o comercial; y Mediación en materia penal.
- Clasificación referida a la naturaleza intrínseca de los conflictos: Mediación comercial; Mediación empresarial; Mediación familiar; Justicia restaurativa y mediación penal; Mediación laboral; Mediación comunitaria; Mediación escolar; Mediación en salud; Mediación ambiental; Mediación Administrativa.

Centrando el tema en la mediación familiar se ha de remarcar que surgió principalmente para aportar soluciones extrajudiciales a los procesos de ruptura de parejas, matrimoniales o no, y en especial aquellas que tuvieran hijos comunes. Es una de las mediaciones más practicadas en la sociedad mundial, además de ser una de las más difíciles de llevar a cabo por el mediador/a.

Según la guía-marco de la mediación en Aragón, desarrollada por el Gobierno de Aragón (2011) (pp. 28) la mediación familiar es *“un proceso en el cual un tercero, un mediador/a independiente e imparcial, ayuda a las partes a alcanzar por sí mismas, soluciones pactadas que les permitan reorganizar su relación como padres, gestionar los intereses comunes y las necesidades de la familia, logrando, en definitiva, un acuerdo que sea duradero y satisfactorios para ambas partes”*.

La mediación familiar ofrece a la pareja un espacio en el que pueden encontrarse, facilitando la creación de un entorno de cooperación y respeto mutuo. Promueve en las partes actitudes de colaboración, abandonando la confrontación. Instruye a la pareja en la negociación, fomentando el dialogo y el trabajo en equipo para buscar un acuerdo justo, perdurable y aceptado por ambos. Evita en gran medida que los padres utilicen a sus hijos como monedas de cambio. Atiende los intereses comunes de la familia, en especial los de los hijos. Reduce los efectos negativos psicológicos y emocionales que produce la separación. Consiste en un proceso más breve y económico. Y resguarda la relación futura entre las partes confrontadas.

Se ha de remarcar que la mediación familiar, al igual que ocurre con otros ámbitos de actuación de la mediación, se trata de un proceso asistido por un mediador neutral e imparcial, en el que son las partes confrontadas las que operan, gestionan y proponen las soluciones. Es un acto voluntario, en el que las partes no se encuentran obligadas a comenzar el proceso, ni a llegar a un acuerdo y pueden abandonarlo en cualquier momento. La estructura empleada por el mediador ya está pautada y a través del empleo de técnicas específicas facilitará a los individuos llegar a acuerdos. Es un proceso confidencial, así como, un proceso informal y flexible que no se encuentra sujeto a reglas formales o procesales. En ninguna situación puede sustituir a un proceso judicial.

Dentro de la mediación familiar, encontramos el servicio de mediación familiar intrajudicial. Según la guía-marco de la mediación en Aragón, desarrollada por el Gobierno de Aragón (2011) (pp. 30), este proceso *“se entiende por la que tiene lugar una vez iniciado un proceso judicial de nulidad, separación o divorcio, incluso después, en fase de ejecución o cumplimiento de la sentencia o de modificación de medidas, bien a solicitud de las partes o por derivación del juez o tribunal.”*

2.2. Recursos judiciales para gestionar los conflictos post-ruptura

La familia como institución social y viva, es y ha sido permanentemente el centro de muchas y diversas problemáticas que no siempre pueden solucionarse dentro de su propio ámbito. Los canjes sociológicos que ha experimentado la familia durante las últimas décadas, con la aparición de nuevos modelos familiares, la regularización de la separación y el divorcio y su aceptación social, han constituido un aumento significativo del número de separaciones parentales.

La judicialización de los conflictos ligados a la separación parental influye en la calidad de vida de las familias y en el bienestar de los hijos, en especial en el de los menores. Los menores son la principal preocupación que aparece a la hora de afrontar una separación. La ruptura de sus progenitores puede producirles un gran impacto emocional y psicológico. Esto dependerá en gran medida de cómo los padres gestionen este gran cambio.

La protección del interés del menor⁴, se encuentra respaldado por normas nacionales y supranacionales, ha promovido que cada vez sea más necesario fomentar el mantenimiento de una parentalidad positiva tras la separación. Existen diversos recursos que permiten al órgano judicial dirigir el proceso de reestructuración de la familia tras la ruptura. Estas medidas favorecen la reducción del conflicto entre los padres y prevén el re-litigio.

Se encuentran dos principales recursos:

- Derivación judicial: terapia familiar, mediación y seguimiento de los acuerdos.
- Coordinación de parentalidad.

2.2.1. Derivación judicial a terapia familiar o a mediación familiar.

La derivación judicial a terapia familiar, según indica García-Herrera (2016) (pp.7) “es uno de los recursos de que puede valerse el Juzgado para gestionar el conflicto de aquellas familias que atraviesan divorcios contradictorios, con situaciones incluso de violencia familiar. La derivación judicial a terapia puede articularse como una recomendación o como una obligación que impone el Juzgado de familia.”.

Frecuentemente se aborda la intervención como un enfoque sistémico, por lo que la familia es comprendida como un sistema que se encuentra dividido en subsistemas. Por lo que la intervención será tanto para la familia en su conjunto, como para los diferentes subsistemas familiares que presente. No obstante, será el profesional el que valore, en función de las circunstancias familiar, desde que enfoque será más idóneo intervenir. Asimismo, será el profesional el que determine las sesiones que requiere el caso.

En caso de no apreciarse psicopatologías que obstruyan en la gestión del conflicto, el Juzgado de familia puede derivar el caso a mediación. La mediación familiar respecto a la terapia familiar busca poner solución a las situaciones de crisis a través de la orientación y el apoyo, el objetivo de la mediación es priorizar la

⁴ Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Boletín Oficial del Estado, núm. 175, de 23 de julio de 2015, pp. 61871 a 61889. Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf>

consecución de acuerdos que sean satisfactorios para todos los integrantes de la familia. Pretende dar lugar a un acuerdo entre los diferentes intereses de los miembros, mientras que la terapia familiar procura cambiar la situación de crisis del círculo familiar. La Terapia se encuentra encaminada al tratamiento y concluye con un acuerdo escrito, mientras que la mediación no.

La mediación intrajudicial se constituye como una nueva forma de actuación de los Tribunales que pretende favorecer la eficacia y justicia de las decisiones de las partes (padres). Los conflictos en los que la mediación puede ser aplicada son los relativos a las pautas de convivencia con los hijos, uso de la vivienda familiar, aportación de alimentos y demás asuntos de naturaleza económica o ante el allanamiento de circunstancias imprevistas que modifiquen la relación, de modo que requieran de un ajuste.

El proceso de restauración *a través de la mediación* ofrece numerosos beneficios a las familias, favorece la comunicación, el consenso y la cooperación entre los miembros de la pareja y les devuelve el control sobre su propio conflicto. Además de favorecer a la pareja, beneficia también a los menores, permitiéndoles redefinir el rol parental y la corresponsabilidad de los progenitores acerca del futuro de los hijos, a los que protege del síndrome de alienación parental, Gardner (1985) lo define como *“un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los padres y de la propia contribución del hijo a la denigración del padre rechazado.”*

La derivación a mediación puede producirse en cualquier fase del procedimiento legal y la competencia para derivar el caso al servicio de mediación corresponde a la autoridad judicial responsable del caso.

Una vez la autoridad judicial haya propuesto a las partes la mediación, se les cita por separado a una sesión informativa. Los mediadores han de ser profesionales cualificados, con formación específica en mediación. Deberán transmitir a las partes durante las sesiones informativas las ventajas que conlleva el proceso de mediación y los incentivos específicos derivados de su participación en ella. La labor que los profesionales desempeñen en esta sesión dependerá en buena medida que las partes acepten o no la mediación.

Es recomendable que las partes acudan a la sesión informativa con sus letrados, para que estos queden enterados de las características y principios del proceso de mediación. Las partes pueden asistir a la sesión y aceptar o no aceptar la mediación, en caso de no aceptarla se levantaría acta de incomparecencia y se da por intentada la mediación sin efecto.

El acuerdo entre las partes puede alcanzarse o no mediante el procedimiento de la mediación. En caso de alcanzar un acuerdo, este podrá ser total o parcial. En caso de que concluya con acuerdo total, cualquiera de las partes puede solicitar el levantamiento de la suspensión en el caso de que se haya decretado. Y si por el contrario el acuerdo fuera parcial, habrá de reanudarse el juicio sobre los aspectos en los que no se ha llegado a consenso.

Los acuerdos alcanzados son de carácter privado. De acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2012⁵, de mediación y asuntos civiles, el acuerdo adoptado durante un proceso de mediación, iniciado posteriormente al inicio de un proceso judicial, las partes implicadas podrán solicitar su homologación. Dicho acuerdo deberá incorporarse a las actuaciones por medio de los abogados y procuradores. En caso de que hubiera menores, el Juez, examinará si alguno de los extremos es contrario al interés de aquellos.

La mediación, frente a la vía contenciosa, ofrece a las familias incentivos muy concretos. Debido a que reduce las tensiones emocionales que suponen los juicios y los efectos negativos del conflicto sobre los hijos. Previene la falta de información, evita la rigidez del proceso contencioso, reduce los costes afectivos, económicos y temporales y previene del re-litigio derivado de la falta de desempeño de los términos de la sentencia.

Ha de señalarse que los procesos de mediación intrajudicial no solo favorecen a las familias, sino que también repercuten de forma favorable al sistema judicial en medida que simplifican los procesos y evitan futuros contenciosos. Lo que minimiza el coste procesal y aumenta la satisfacción de los ciudadanos con respecto a su percepción de la Administración de Justicia.

A pesar de las numerosas ventajas que podemos encontrar en la mediación como recurso frente a la vía contenciosa, tanto para las familias como para las Administraciones, la experiencia observada hasta ahora muestra que entre los profesionales del Derecho aun muchos sectores se encuentran reacios a su integración en el modelo de la justicia. Por lo que aún queda un largo camino para su completa aceptación.

2.2.2. Derivación a Coordinación de parentalidad

Hasta el momento, se ha hablado del recurso de derivación judicial a terapia familiar y a mediación. Sin embargo, se dan ocasiones en que ni los medios de ejecución tradicional, ni los recursos alternativos, como de los que se han estado hablando, son suficientes para la gestión del conflicto en fase de ejecución de sentencia. En los casos en los que el desencuentro entre los progenitores es elevado o se cronifica a través del re-litigio es posible que el juez derive el caso y recurra a una nueva opción, un rol innovador relativamente reciente, el *coordinador de parentalidad*, orientado específicamente a la defensa del interés de los menores.

Contextualización

La coordinación de parentalidad nació en Estados Unidos hace dos décadas. El nacimiento de dicho proceso tuvo lugar debido a un singular fenómeno social que se vivió en el país. En aquel momento, el número de divorcios había aumentado, cada vez las rupturas se producían con niños más pequeños, ya que los matrimonios duraban menos. Con más frecuencia los progenitores solicitaban la custodia compartida. Aumentaban las disputas que se resolvían por vía judicial, y este acontecimiento provocaba que los juzgados quedaran saturados. Para una minoría de las familias que se encontraban en esta situación, las sentencias judiciales y las intervenciones tradicionales no eran suficientes para solucionar sus casos. Además, en estas

⁵ Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, de 7 de julio de 2012, pp. 49224 a 49242. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf>

circunstancias, se acumulaban numerosos procedimientos judiciales, lo que producía un importante gasto económico para las familias.

Tras numerosos estudios, que tuvieron lugar en distintos estados de EEUU en los años 90, sobre las consecuencias producidas por los divorcios, identificaron con claridad que no era la separación lo que más afectaba a los hijos, sino el conflicto interparental. La coordinación de parentalidad nació para dar soluciones a las familias, fuera de los juzgados, y como un instrumento que el juez pudiera emplear para el acatamiento de las resoluciones judiciales.

En que consiste y cuando se aplica

La definición más ampliamente aceptada, es la establecida por la *Association of Families and Conciliation Courts*⁶(2005), define la coordinación de parentalidad como *“un proceso alternativo de resolución de disputas centrando en los niños/as en virtud del cual un/a profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver oportunamente sus disputas, ofreciéndoles psicoeducación con respecto a las necesidades de sus hijos/as y –previo consentimiento de las partes y/o del juzgado– tomando decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial, o por el acuerdo de designación del coordinador de parentalidad”*.

La coordinación de parentalidad resulta realmente útil en una variedad de casos, en los que el conflicto se ha cronificado y que presentan aspectos que describen la presencia de una alta conflictividad entre los progenitores. El término de alta conflictividad lo describen Birnbaum y Bala (2010) (pp.404) como *“gran número de litigios y re-litigios, alto nivel de ira y desconfianza, dificultades de comunicación sobre los hijos/as, historia de violencia doméstica y rechazo de los hijos/as a ir con un progenitor”*. Una situación de alta conflictividad se caracteriza, además, por una gran falta de confianza entre los progenitores, y elevados niveles de enfado. Así como, incapacidad que presentan para comunicar sus sentimientos y necesidades de forma óptima y uso frecuente del sistema judicial.

Para valorar en qué nivel se encuentra el conflicto interparental, Garrity y Baris (1994) diseñaron una escala, en la que el conflicto se clasificaba en mínimo, leve, moderado, moderado-grave o grave.

Además de la alta conflictividad existente en el conflicto de los progenitores, se ha de tener en cuenta su cronificación. Una separación o divorcio supone una gran reestructuración del núcleo familiar, que pasa de una familia mononuclear a una binuclear⁷. Según Capdevila (2016) (pp. 42) en su informe de psicología aplicada, se calcula que las familias pueden tardar hasta dos años en realizar esa transición. Para muchos progenitores, puede haber dificultades durante estos dos primeros años sin llegar a formar parte de un conflicto cronificado y excesivamente judicializado, pero después encuentran una estabilidad. En cambio, en las familias usuarias de la coordinación de parentalidad el conflicto se ha cronificado y se ha judicializado, sin encontrar esa estabilidad.

⁶ Definición publicada en las directrices para la buena práctica de la coordinación de parentalidad (Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, 2013; *Task Force on Parenting Coordination*, 2006).

⁷ La familia binuclear, cuando el divorcio deja a los hijos a cargo del padre y de la madre.

Los factores que influyen en la creación y la cronificación de la alta conflictividad, según Johnson (1994), pueden ser tanto factores individuales como contextuales. Los factores individuales, son los conflictos generados por la separación o divorcio que interactúan con las vulnerabilidades caracterológicas de los progenitores. Los contextuales, en cambio, son los que añaden complejidad con la intervención de los profesionales (de diferentes campos) e instituciones, con quien los propios progenitores contactan y buscan alianzas que pueden potenciar el conflicto.

Eddy (2011) describe algunas de las características de progenitores <<conflictivos>> *“tienen un pensamiento de <<todo o nada>>, mala gestión emocional, conductas extremas y culpabilizan a otros. Suelen mostrar un estilo de gestión de conflictos competitivo, con mentalidad de ganar vs. perder y poca capacidad de empatía”*. Todo ello deriva en procesos contenciosos, en los que los actores buscan el ganar, en buscar a un ganador y no pensar en la protección y en el bienestar de sus hijos.

Coparentalidad

Una vez la pareja se encuentra separada o divorciada, con hijos menores en común, lo óptimo es que los progenitores desempeñen la coparentalidad. Capdevila (2016) (pp.43) describe el concepto de coparentalidad como *“la forma en que los progenitores se perciben el uno al otro, coordinan el cuidado de sus hijos, utilizan las habilidades para comunicarse, resolver problemas y decidir conjuntamente”*. Los estudios (Ahrons, 1994; Hetherington, 2003; MacCoby y Mnookin, 1992) que se han ido desarrollando, establecen cuatro dimensiones de coparentalidad post- divorcio. Se categorizan en: cooperativa, conflictiva, paralela y mixta. El nivel de involucración de los progenitores y el nivel de conflicto existente entre ellos, son las variables que habrán de tenerse en cuenta para categorizar la coparentalidad entre los padres en una de estas cuatro dimensiones establecidas.

Un buen plan de parentalidad debe recoger propuestas en las que se deben consignar determinados aspectos. El lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Se deberán establecer las normas acerca de a que progenitor le corresponde la guarda de los hijos comunes, en cada momento. Las tareas de las que se ocupará cada progenitor, acerca de las actividades diarias que desempeñen los hijos. La forma en la que se producirán los cambios de guarda y, si es conveniente, establecer los costes que generen. El régimen de relación y comunicación con los hijos durante los periodos en los que un progenitor no este con ellos. El régimen de estancia de los hijos en periodos vacacionales y en fechas señaladas para ellos, para los progenitores o para su familia. El tipo de educación y actividades extraescolares que desempeñen. La forma en la que habrán de cumplir el deber de compartid toda información sobre sus hijos acerca de asuntos de educación, salud y bienestar. Así como la manera en la que deberán tomar decisiones relativas al cambio de domicilio y otras cuestiones relevantes para los hijos.

Perfil profesional

El perfil de los profesionales que desempeñan el rol de <<coordinador de parentalidad>>, integra habilidades que pueden ser desempeñadas por psicoterapeutas, abogados, trabajadores sociales o mediadores. Si bien, la profesión de origen del coordinador puede ser cualquiera de las citadas, es relevante que la persona tenga formación específica en parentalidad, habilidades de comunicación y gestión de conflictos, además de contar con conocimientos jurídicos básicos, en especial en derecho de familia. La formación más próxima para

ejecutar dicho rol, sería el de un mediador/a especializado en familia. Por lo que el rol del profesional podría resumirse como un rol único basado en competencias de diferentes profesiones.

El coordinador de parentalidad puede tratar aquellos asuntos que generen conflicto en la implementación del plan de parentalidad, como los problemas relacionados con el calendario de guarda de los menores, las vacaciones, la comunicación entre los progenitores, las entregas y recogidas de los niños, entre otros. Sin embargo, no puede tratar los temas que puedan modificar sustancialmente el período o calidad del tiempo que un progenitor pasa con su hijo; la designación de guardador principal que establece el plan de parentalidad; la potestad, la responsabilidad parental o las visitas supervisadas, en caso de haberlas.

La designación del coordinador concreto que desempeñara el proceso, ha de ser consensuada por las partes por mutuo acuerdo. En alguna ocasión, si se da un caso con elevada conflictividad, el juzgado suprime la facultad de elección de los padres, designando el coordinador.

A pesar de sus similitudes, se debe diferenciar con nitidez los roles de los profesionales que ejercen la mediación y la coordinación de parentalidad. Aunque ambos se inscriben en el contexto de *Alternative Dispute Resolution*, hay varias connotaciones que el profesional en parentalidad no comparte con el mediador. Una de las diferencias que presentan, importante destacar, es que el coordinador de parentalidad al ser un auxiliar de juzgado, el proceso que desarrolla, no siempre puede cumplir el principio ético fundamental de confidencialidad. Así como, tampoco puede en ciertas ocasiones ser neutral, ya que, dentro de los límites de sus funciones, determinadas por la resolución judicial, el profesional puede tener cierto poder decisorio.

Proceso de coordinación de parentalidad

Para desarrollar el proceso de coordinación de parentalidad, el coordinador, podrá seguir las cuatro fases propuestas por *La American Psychological Association* (APA, 2010)⁸. Estas fases fueron fruto de un proyecto piloto, que llevó a cabo el APA, las cuales son: fase inicial; fase de implementación; fase de mantenimiento; y fase final de proceso.

A continuación, se procura a describir en qué consisten y que ha de realizarse en cada una de las fases del proceso de coordinación de parentalidad, según La APA y descritos por Capdevila (2016) (pp:44-45):

La fase de designación y preparación del proyecto, previa al comienzo del proceso, se encuentra esta “prefase”. Se da en el momento en el que se recibe el caso. Los progenitores pueden acceder al proceso de coordinación de parentalidad a través de la vía judicial o por privado. Si se accede por vía judicial, primero, el futuro coordinador del caso recibe la petición de ponerse al frente del caso. El juzgado accede a un coordinador, a través de una institución que disponga de un listado de profesionales especializados, o bien a través de los progenitores o por los abogados que lo han solicitado al juzgado.

⁸ *La American Psychological Association* (APA), fue fundada en 1892. Es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses de gran prestigio.

Tras la recepción del caso, si se diera de la existencia de una resolución judicial, sería óptimo que se realizará un protocolo judicial entre el centro o profesional que vaya a desempeñar el rol de coordinador de parentalidad. En él, se establecería la integración de determinados apartados generales y específicos para el caso. Se fijaría la justificación por la que se deriva a la familia a coordinación de parentalidad y aquellos temas específicos que se deban tratar. Especificar que es la coordinación de parentalidad. Definir el rol del coordinador y descripción de sus funciones.

Así como, la exposición de las competencias que posee el coordinador, durante el proceso: convenir sesiones con los hijos, entrevistas con miembros de la familia extensa, ponerse en contacto con los abogados cuando considerase necesario o con otros profesionales involucrados en el caso, acceder al expediente judicial, poseer copia de los documentos legales necesarios, derivar a los progenitores a servicios de salud mental, acceso a informes médicos, psicológicos, académicos de los niños y progenitores; establecer si se le otorga capacidad, y en que situaciones, al coordinador de tomar decisiones si los progenitores no logran alcanzar un acuerdo; proporción del pago de cada progenitor; determinar la periodicidad con la que se emitirán informes sobre el proceso de coordinación a la instancia judicial correspondiente; duración estimada acerca del proceso de coordinación de parentalidad; circunstancias por las que se podrá interrumpir el proceso.

Se precederá a la revisión del expediente judicial. Los archivos judiciales de las familias que inician el proceso de coordinación de parentalidad suelen ser muy voluminosos, debido a la alta judicialización que de normal presentan. Formaran parte del expediente de coordinación de parentalidad la sentencia de separación/divorcio, las evaluaciones psicológicas, historias de violencia y órdenes de alejamiento e intervenciones de profesionales los documentos más relevantes.

Previamente a reunirse el profesional con la familia, el coordinador podría iniciar un genograma con la información que posee, obtenida del expediente. Según McGoldrick y Gearson (1985) en un genograma *“podemos registrar la información de varias generaciones, en tres niveles: demográfico, funcional y relacional, siguiendo una determinada simbología.”* La American Psychological Association (APA), establece que ha estos niveles ha de añadirse el judicial.

En cada uno de los niveles, el coordinador establecerá:

- Nivel demográfico: la información demográfica; fechas de nacimiento y muerte, fecha de matrimonio, separación/ divorcio, profesión, nivel educativo, donde viven, embarazos, abortos.
- Nivel funcional: información acerca del nivel de funcionamiento, como pueden ser los datos más o menos objetivos del funcionamiento médico, social o emocional de los miembros.
- Nivel relacional: información acerca de las diferentes relaciones existentes entre, los miembros de la familia; así como relaciones con diferentes profesionales e instituciones, reflejando las fechas de inicio.
- Nivel judicial: la información judicial referente a datos significativos de los litigios.

Una vez desarrollado lo anteriormente descrito, se da paso a la *Fase inicial*. La duración estimada será de dos meses aproximadamente, con una media de 6 u 8 sesiones, suelen tener lugar semanalmente.

Será el momento de dar información acerca del servicio, así como de los beneficios que reporta y normas que lo sustentan. Se construye la relación entre el coordinador y los progenitores, el profesional comprenderá y validará las preocupaciones de estos. A su vez, elaborará el plan de trabajo identificando los

conflictos y estableciendo objetivos realistas, el plazo para alcanzar el logro de estos y tareas centradas en el interés del bienestar de los menores.

En las primeras sesiones, será fundamental que quede definido el rol del coordinador, que se espera de cada progenitor y cómo se comunicaran entre ambos y con el profesional. Es recomendable que la primera sesión se realice junto a los dos progenitores, para evitar dar más información a uno que a otro. Debido a la alta conflictividad que presentan las partes, se pueden encontrar situaciones en las que no quieran acudir a esta sesión de forma conjunta, por lo que resulta fundamental explicar el objetivo que persigue esta primera sesión. En caso de que existiera un historial de violencia o así fuera indicado en la resolución judicial, deberá optarse por que la sesión se desarrolle de forma individual. El hecho de que se ejecuten individualmente, permitirá al coordinador hallar más información acerca de la vivencia de la separación y la historia del conflicto, así como observar la percepción de las necesidades de los hijos comunes de ambos padres.

Se le requiere a cada uno de los padres que rellenen cuestionarios de *screening* de los factores de riesgo que incluyan cuestiones acerca de conflictividad, violencia y abuso de sustancias.

Es conveniente, durante la fase inicial, tener a mano los documentos que integran la resolución judicial en la que se designa al coordinador de parentalidad y la resolución judicial de la separación/divorcio que contenga el plan de parentalidad aprobado por el juzgado.

Entre los objetivos que se pretenden lograr, a lo largo de estas primeras sesiones, se incluyen introducir el proceso de coordinación de parentalidad. Esclarecer el rol del coordinador y las responsabilidades e identificar las necesidades de los distintos miembros de la familia. Instaurar la forma en la que van a comunicarse los progenitores entre ellos y con el coordinador a lo largo del proceso. El objetivo prioritario que deben entender los progenitores es que se trata de un proceso centrado en las necesidades de sus hijos.

Al finalizar la realización de lo anteriormente dispuesto, se procederá a firmar el contrato de coordinación de parentalidad, el cual se enviará a la instancia judicial y a los abogados, según las características del caso. El contrato deberá incluir:

- Fecha de inicio y de final del proceso;
- el proceso de coordinación de parentalidad;
- el objetivo del coordinador, sus funciones y sus limitaciones;
- temas a tratar;
- el protocolo de comunicación que se establezca entre los progenitores y el coordinador;
- delegación de capacidad para decidir;
- confidencialidad (en caso de que se aplique), honorarios y forma de pago;
- circunstancias por las que se dará por terminado el proceso;
- y la firma de los progenitores.

Tras firmar el contrato de coordinación, comienza la *Fase de implementación*. Su duración será aproximadamente de 12 meses, durante los que se busca llevar a cabo el plan de trabajo trazado.

Interesa que las sesiones sean muy estructuradas y se encuentren dirigidas a identificar los problemas y buscar aquellas soluciones en el mejor interés de los hijos, para evitar que sean empleadas por los progenitores al servicio del conflicto.

Las sesiones se realizarán de forma individual y conjunta, también alguna de ellas será realizada con los niños. Se ofrecerán sesiones psicoeducativas y de aprendizaje de gestión del conflicto, en función de la situación que presente la familia.

Sera a lo largo de la fase de implementación, si se considera necesario, derivar a las partes a otros profesionales para poder alcanzar los objetivos establecidos previamente.

El coordinador de parentalidad deberá utilizar sus habilidades mediadoras, para ayudar a las partes a que consensuen los distintos aspectos establecidos en el plan de parentalidad. Además, empleara distintas técnicas: charlas psicoeducativas; modelaje de comunicación efectiva; técnicas de coaching; entre otras.

Seguidamente se encuentra la *Fase de mantenimiento*. En ella el coordinador de parentalidad dispondrá a los progenitores a que mantengan el progreso alcanzado, hasta el momento, y que lo mantengan en el tiempo sin ayuda de terceros. Las sesiones, se producirán de forma quincenal o mensual. Puede durar hasta un año, en función del caso.

A modo final, se desarrollará la *Fase final del proceso*. Se alcanza cuando el coordinador considere que los progenitores pueden funcionar sin su ayuda.

Si se requiere judicialmente, se emite un informe en el que aparezcan de forma detalla los objetivos; el progreso alcanzado; los temas y acuerdos tratados; y aquellos problemas, en caso de que los haya, que se encuentran pendientes de resolución; y recomendaciones.

3. Plan de investigación.

Hoy en día, el proceso de separación parental forma parte de un camino que recorren muchas familias. Como se ha referido anteriormente, la familia es algo vivo que sufre cambios y evoluciona y todas aquellas decisiones que se tomen dentro de ella, de carácter individual o colectivo, afectaran a todos sus miembros.

En el caso de los divorcios o separaciones, la decisión es tomada por los progenitores y los hijos, principalmente los menores, son una de las principales preocupaciones, ya que puede producirles un fuerte impacto emocional. Las consecuencias y como vivirán el proceso tanto los padres, como los hijos, variará en función de cómo se haya tramitado.

Existen recursos tradicionales en los que la Justicia se apoya para mitigar situaciones conflictivas post-ruptura y preservar lo recogido en las leyes y normas universales, supranacionales y nacionales del interés superior del menor. Sin embargo, existe un porcentaje de casos en los que dada la alta conflictividad parental que presentan, los recursos tradicionales no son suficientes. Para ellos se desarrolló el Proceso de Coordinación de Parentalidad, cuyo objetivo primordial es la protección y el bienestar de los menores.

3.1. Objetivo general

A través del presente Trabajo de Fin de Grado, se persigue realizar un análisis que muestre las ventajas o los inconvenientes que la implantación de la figura profesional del coordinador de parentalidad ha proporcionado en aquellas sociedades en las que ha sido establecido. En segundo lugar, realizar una valoración sobre las consecuencias que apalearía implantar la coordinación de parentalidad en los juzgados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que, aquellos progenitores con un proceso de divorcio o separación de alta conflictividad, puedan aprender a gestionar, gracias a esta figura, un proceso centrado en la protección y bienestar de sus hijos.

Se espera que los resultados que finalmente se obtengan, muestren la idoneidad de la coordinación de parentalidad para proteger el interés superior del menor en aquellos conflictos derivados de sus progenitores, que terminan sufriendo ellos.

En la actualidad española comienza a tener cada vez más eco la figura del coordinador de parentalidad, siendo la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde el año 2014, pionera y seguida por otras Comunidades españolas como País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana. Aragón comienza a ensayar la figura del coordinador de parentalidad, dándose ya la existencia de una sentencia emitida por el Juzgado nº6 de familia de la capital aragonesa. En respuesta a ella, el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón promueve la puesta en marcha de un curso para formar a profesionales bajo el rol de coordinador de parentalidad.

3.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se plantean, bajo la estructura de preguntas, para dar respuesta al objetivo general que persigue el presente epígrafe serán:

- Debido a la falta de legislación del proceso de coordinación de parentalidad ¿Bajo qué legislación quedaría sujeta la coordinación de parentalidad? No existen leyes y normas estatales, que como con la mediación familiar, permitan al juez que ante determinadas características se derive explícitamente el caso a coordinación de parentalidad. Sin embargo, al estar el proceso orientado exclusivamente a la defensa del interés del menor, el magistrado responsable del caso, podrá fundamentar su derivación con lo establecido en determinadas normas de nivel supra estatal, europeo, estatal y autonómico.

En la primera parte del análisis, se plasmarán los artículos de las legislaciones en las que queda recogido el Interés Superior del Menor. De tal forma que se analice, en que legislación podrá sustentarse un juez, cuando así considere que la coordinación de parentalidad sea lo más óptimo para la protección del menor en el caso determinado.

Se analizarán las leyes a nivel supra estatal, estatal, nacional y autonómico. Las de nivel autonómico serán las de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que es la experiencia española en la que se basa el análisis del proceso; y en las de la Comunidad Autónoma Aragonesa, donde se pretende analizar la idoneidad de esta para la implantación de la coordinación de parentalidad. Las normas y leyes, que se analizarán serán:

A nivel supra estatal, europeo y estatal:

- La Convención Universal de los Derechos del Niño.
- La Convención Europea sobre Derechos del Menor de 1996.
- Reglamento Europeo 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.
- Convenios de la Haya de 1980 y 1996.
- Constitución Española.
- Ley estatal 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A nivel autonómico, Comunidad Autónoma de Cataluña.

- Estatuto de Autonomía de Cataluña.
- Código Civil de Cataluña.
- Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia.

A nivel autonómico, Comunidad Autónoma de Aragón.

- Código Foral de Aragón.
- Estatuto Aragonés.

- ¿Qué formación precisa el coordinador de parentalidad? ¿Qué formación adicional compele el trabajador social para ejecutar el rol de coordinador de parentalidad?

Para dar respuesta a la pregunta planteada, se analizarán y plasmarán las directrices que la AFCC (*Association of Family and Conciliation Courts*) marca como las idóneas, y que habrá de seguir el coordinador de parentalidad.

Así como, las declaraciones realizadas por D'Abate, trabajador social, mediador familiar y coordinador de parentalidad. A través de ellas se sacarán las conclusiones oportunas acerca de la preparación que requiere un profesional para lograr su especialización en el campo de la coordinación de parentalidad y la que precisa, concretamente, un trabajador/a social.

- ¿Se dan a nivel nacional, casos de nulidades, divorcios o separaciones? ¿existe un porcentaje destacable de población que sufre este proceso? ¿hay menores de por medio? ¿y en Comunidad Autónoma de Aragón?

Para constatar la realidad sobre la existencia de dichos procesos en la sociedad española y más concretamente en la población aragonesa, se analizarán datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Aragonés de Estadística (IAE). Se emplearán los datos recogidos hasta el año 2016, debido a que el de los años 2017 y 2018 aún no se encuentran publicados.

A través de los datos, se estudiará si realmente se da este hecho social en la población aragonesa, para poder introducir la figura del coordinador de parentalidad.

- ¿Cuáles son los efectos que pueden aparecer en los divorcios de alta conflictividad? ¿La coordinación de parentalidad protege a los menores de los litigios parentales post-divorcio? ¿Resulta ventajosa y beneficiosa la coordinación de parentalidad para los divorcios con alta conflictividad?

Se estudiará, a través de artículos de revistas científicas, libros y estudios, las características que presentan los progenitores que mantienen una alta conflictividad. Así como, los efectos que esta puede provocar en los niños y adolescentes.

A raíz de investigaciones realizadas por diversos profesionales con renombre, se establecerán las consecuencias que dichas separaciones o divorcios pueden causar en el menor. Así como, la importancia de protegerles del litigio parental.

Se analizará si el proceso de coordinación de parentalidad resulta beneficioso para proteger a los menores de los divorcios y separaciones que presentan estas características.

- Hasta el momento ¿Qué ha proporcionado la coordinación de parentalidad en las sociedades en las que ha sido practicada?

Para ello, se analizará la experiencia estadounidense. Ya que fue donde surgió el proceso y donde más asentado se encuentra. También, la experiencia catalana, debido a que, desde el año 2015, ha

sido pionera en España en la implantación del proceso y donde ya comienzan a apreciar los efectos que ha tenido su desarrollo en el porcentaje de familias que se encuentran en dichas circunstancias.

Se tomará como referencia el caso expuesto por Abilleira, Martínez- Valladares, Fariña y Parada (2017) en el que se desarrollaran las fases del proceso y se plasmara las situaciones, previa y final a la coordinación de parentalidad, en las que se ha encontrado la familia.

4. Análisis.

4.1. Legislación

Tomando como punto de partida la base legal del proceso de coordinación de parentalidad, ha de detallarse que no existe una legislación específica en España que regule concretamente el proceso de coordinación de parentalidad. No obstante, existen diferentes bases legales a nivel supra estatal, europeo, estatal y autonómico que de forma indirecta le aportan un soporte legal. Serán todas aquellas que su normativa recoja el interés superior del menor.

A nivel supra estatal, europeo y estatal se pueden encontrar:

La *Convención Universal de los Derechos del Niño (2006)*⁹, artículos 3.1 y 4. El 3.1 establece que en todas las medidas referentes a los niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. A su vez, el artículo 4 dicta que los Estados adoptaran totas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos que reconoce la presente Convención. En lo derivado a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados adoptaran esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando así fuera oportuno, dentro del marco de la cooperación internacional. Por lo que el magistrado responsable del caso, si así, considerase oportuno podrá establecer la coordinación de parentalidad, si lo considerase como el recurso idóneo para cumplir con los derechos del menor recogidos en la presente Convención.

En la *Convención Europea sobre Derechos del Menor*¹⁰ de 1996, en el artículo 6 encontramos el papel de las autoridades judiciales en proceso de decisión. En el apartado a, se establece que las autoridades han de examinar si disponen de información suficiente con el objetivo de tomar una decisión en el interés superior de aquel y, en su caso, recabar información complementaria, en particular de las responsabilidades parentales. Con lo establecido en el artículo, en caso de que los jueces no contaran con la información suficiente para tomar una decisión, si consideran que la coordinación de parentalidad es el recurso idóneo para obtenerla podrá fundamentar la derivación del caso a ella.

El *Reglamento Europeo 2201/2003*¹¹, el presente reglamento se aplica a las materias civiles, independientemente de cuál sea el órgano jurisdiccional. Se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, separación judicial o a la nulidad matrimonial. Dispone que únicamente habrá de aplicarse a la disolución del matrimonio, sin hacerse cargo de los problemas tales como la causa de divorcio o las consecuencias patrimoniales u otras posibles medidas accesorias. En relación a los menores atañe que se

⁹ Unicef (2006). *Convención sobre los derechos del niño*, de junio de 2006, pp. 10 a 11. Recuperado de <http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

¹⁰ Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996. Boletín Oficial del Estado, núm. 45, de 21 de febrero de 2015, páginas 14174 a 14189. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1752>

¹¹ Reglamento (CE) nº 2201/2003 del consejo, de 27 de noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 137/2000. Boletín Oficial del Estado núm. 338, de 23 de diciembre de 2003. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-82188>

aplica únicamente a las medidas de protección del menor; se aplicara a los casos en los que exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de los bienes del menor. Las normas que presenta en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor. Por lo que cuando el caso así lo requiera, el juez responsable del caso,

será en uno de los reglamentos a los que podrá sujetarse a lo dispuesto en esta ley para lograr su cometido a través de la coordinación de parentalidad si así considerase necesario.

*Convenios de La Haya de 1980*¹² tiene como finalidad garantizar la institución inmediata de los menores trasladados o retirados de manera ilícita en cualquier estado Contratante del Convenio y velar por los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados Contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes. Y el *Convenio de 1996*¹³ relativo a la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños. Destinado a menores de 18 años, en relación con la responsabilidad parental, guarda, tutela y similares, representación y asistencia, acogimiento y similares, supervisión del menor y de sus bienes.

En la *Constitución Española* en el artículo 39¹⁴ encontramos lo siguiente: “1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley establecerá la investigación de paternidad. 4. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.”

*Ley estatal 26/2015*¹⁵, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La modificación se refiere, básicamente, a la adaptación de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España. La ley original, junto con las previsiones establecidas en el código civil en esta materia, constituyen el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo territorio del Estado. En ella han sido introducidos mejoras de instrumentos de protección jurídica, debido a los cambios sociales importantes que han tenido lugar durante los últimos 20 años.

En el artículo 11, de la presente ley, se dispone lo siguiente “Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen”. Entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores se encuentra la prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.

¹² Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 26099 a 26105. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691>

¹³ Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996. Boletín Oficial de Estado, núm. 291 de 2 de diciembre de 2010, pp. 99837 a 99868. Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/02/pdfs/BOE-A-2010-18510.pdf>

¹⁴ Constitución Española de 6 de febrero de 1978. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 3 a 39. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>

¹⁵ Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Boletín Oficial de Estado, núm. 180 de 29 de julio de 2015, pp. 64544 a 64613. Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf>

Así mismo, en el artículo 12.1 *“La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de servicios y recursos adecuados para tal fin... En las actuaciones de protección deberán primero, en todo caso, las medidas familiares frente a las residencias, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas”*.

La Ley Orgánica 1/1996¹⁶, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introdujo el artículo 158 CC. En los principios generales de la presente ley primara el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera existir. Igualmente, todas las medidas que se adopten al amparo de la Ley deberán tener un carácter educativo.

El artículo 17, actuaciones en situaciones de riesgo, de la ley establece lo siguiente: *“En situaciones de riesgo cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentren y a promover los factores de protección del menor y su familia”*.

A nivel autonómico, la comunidad autónoma de Cataluña (pionera en la coordinación de parentalidad) refuerza la anterior base legal con:

El Estatuto de Autonomía de Cataluña¹⁷, en su artículo 17 expone los derechos de los menores, instituye que *“tienen derechos a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social”*. En consecuencia, los magistrados podrán derivar el caso a coordinación de parentalidad, cuando consideren que es el recurso más idóneo para proteger y promover el desarrollo de la personalidad y el bienestar del menor dentro de su contexto familiar.

El magistrado podrá apoyarse para dictar sentencia, derivando el caso a coordinación de parentalidad, en el libro segundo del Código Civil de Cataluña¹⁸ relativo a la persona y a la familia, tomando como referencia el artículo 211-6.1 se encuentra recogido el Interés superior del menor. El artículo dispone que será el interés superior del menor el principio rector de cualquier decisión que le afecte.

Asimismo, el artículo 233-10.4 establece que la autoridad judicial, puede encomendar la guarda a los abuelos, a otros parientes, a personas próximas o, en su defecto, a una institución idónea, a las que pueden conferirse funciones tutelares con suspensión de la potestad parental.

En el artículo 233-13 queda recogida la supervisión de las relaciones personales en situaciones de riesgo, disponiendo que *“La autoridad judicial puede adoptar, por razones fundamentales, medidas para que las*

¹⁶ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 15, de 17 de enero de 1996, pp. 1225 a 1238. Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01225-01238.pdf>

¹⁷ Ley Orgánica 6/2006, de 19 de junio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Boletín Oficial del Estado, núm. 172, de 20 de julio de 2006, pp. 27269 a 27310. Recuperado de http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2006.pdf

¹⁸ Ley 25/2010, de 19 de julio, del segundo libro del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Boletín Oficial del Estado, núm. 203, de 21 de agosto de 2010, pp. 73429 a 73525. Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/21/pdfs/BOE-A-2010-13312.pdf>

relaciones personales del menor con el progenitor que no ejerce la guarda o con los abuelos, hermano o demás personas próximas se desarrollen en condiciones que garanticen su seguridad y estabilidad emocional” y “Si existe situación de riesgo social o peligro, puede confiarse de la relación a la red de servicios sociales o a un punto de encuentro familiar”.

Además, en el artículo 236-3 sobre la intervención judicial establece que “La autoridad judicial, en cualquier procedimiento, puede adoptar las medidas que estime necesarias para evitar cualquier perjuicio personal o patrimonial a los hijos en potestad. A tal efecto, puede limitar las facultades de los progenitores, exigirles la prestación de garantías e, incluso, nombrar a un administrador judicial.” “La autoridad judicial puede adoptar medidas a que se refiere el apartado 1 de oficio o a instancia de los propios hijos, de los progenitores, aunque no tengan el ejercicio de la potestad, de los demás parientes de los hijos hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad y del ministerio fiscal.”

En la *Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia*, los siguientes artículos serán en los que el responsable del caso podrá apoyarse:

“Artículo 38. Derechos de relación y convivencia. 1. Los niños y los adolescentes tienen derecho a vivir con sus progenitores salvo en los que la separación es necesaria. Tienen también derechos a convivir y a relacionarse con otros parientes próximos, especialmente con los abuelos; 2. Los niños y los adolescentes tienen derecho a mantener un contacto directo con los progenitores con los que no convivan; 3. La autoridad judicial o administrativa, según proceda, debe tomar las medidas adecuadas para garantizar los derechos de visita a los niños y adolescentes que residen habitualmente en el extranjero; 4. El niño o el adolescente separado de sus progenitores por la adopción de alguna medida judicial o administrativa que comporta la encarcelación o la detención de los mismos tiene derecho a ser informado del lugar y la situación en los que se encuentran, teniendo siempre en cuenta el interés del niño o el adolescente; 5. Las administraciones públicas deben garantizar el ejercicio adecuado de los derechos regulados por el presente artículo y de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral en lo que concierne a su ejercicio, especialmente si existe una situación de conflicto familiar, mediante los servicios de punto de encuentro u otros que cumplan la misma finalidad, con la garantía, en cualquier caso, del bienestar y la seguridad de los niños y los adolescentes. El régimen, la organización y el funcionamiento de estos servicios deben establecerse por reglamento.” “Artículo 39. Mediación. Los poderes públicos, a fin de garantizar el derecho de los niños y los adolescentes a relacionarse con sus familias, deben fijar procedimientos específicos de mediación familiar. El sistema de mediación también debe incluir los conflictos que afectan a los niños y a los adolescentes en el ámbito familiar”.

“Artículo 81. Protección efectiva ante los maltratos a niños y adolescentes. Los poderes públicos deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y a los adolescentes de cualquier forma de maltrato y, especialmente, de cualquiera forma de violencia física, psíquica o sexual”.

“Artículo 116.3. El órgano competente de la Generalidad en la supervisión de la relación y las visitas del niño o el adolescente con sus familiares tiene la obligación de procurar los mecanismos necesarios para que la visita tenga lugar en los horarios más adecuados de acuerdo con el interés del niño o el adolescente, teniendo en cuenta especialmente su horario escolar.”

Y en el caso de Aragón, podría encontrar soporte en:

En el *Estatuto Aragonés*¹⁹; en su artículo 24.a y b, sobre la protección personal y familiar:

“Los poderes públicos aragoneses orientaran sus políticas de acuerdo con los siguientes objetivos:

- a) Mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas.*
- b) Garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia reconocida por el ordenamiento jurídico.”*

En el *Código Foral de Aragón*²⁰, en los artículos:

“Artículo 60. Relación personal del hijo menor.

- 1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambas partes, aunque vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo cuando el interés superior del menor lo exija.*
- 2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.*
- 3. El juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan separados.”*

“Artículo 76. Derechos y principios.

- 1. La ruptura de la convivencia de los progenitores no afectara a los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar.*
- 2. Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos.*
- 3. En las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se respetarán los siguientes derechos: a) Los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar. b) Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tiene derecho a la igualdad en sus relaciones familiares.*
- 4. El derecho del hijo menor a ser oído antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona, se rige por lo dispuesto en el artículo 6.*
- 5. Los anteriores derechos se amortizarán de acuerdo con los principios de libertad de acto, de información recíproca y de lealtad en beneficio del menor.”*

“Artículo 77. El pacto de relaciones familiares.

- 1. Los padres podrán otorgar un pacto de relaciones familiares como consecuencia de la ruptura de su convivencia, en el que fijarán los términos de sus nuevas relaciones familiares con los hijos.*

¹⁹ Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, núm. 47, de 23 de abril de 2007, pp. 6258 a 6278. Recuperado de <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=192031363131>

²⁰ Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de <<Código del Derecho Foral de Aragón>>, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas. Boletín Oficial de Aragón, núm. 67, de 29 marzo de 2011, pp. 6490 a 6616. Recuperado de <https://www.boe.es/caa/boa/2011/067/d06490-06616.pdf>

2. *El pacto de relaciones familiares deberá concretar, como mínimo, los acuerdos: a) el régimen de convivencia (...) f) La asignación familiar compensatoria.*
3. *La modificación o extinción del pacto de relaciones familiares se podrán llevar a cabo en los siguientes supuestos: a) Por mutuo acuerdo de los padres (...) f) incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del pacto.*
4. *El pacto de relaciones familiares y sus modificaciones producirán efectos cuando sean aprobados por el Juez, oído el Ministerio Fiscal, en garantía de los derechos y principios recogidos en el artículo anterior.*
5. *El juez aprobará el pacto de relaciones familiares, salvo en aquellos aspectos que sean contrarios a las normas imperativas o cuando no que de suficiente preservado el interés de los hijos (...).*
6. *Cuando el régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas se deriven derechos y obligaciones para estos, el Juez deberá darles audiencia antes de su aprobación."*

"Artículo 78. Mediación familiar.

1. *Los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales.*
2. *En caso de presentación de demanda judicial, el juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y designar para ello mediador familiar. Asimismo, el Juez podrá (...) que lleguen a un acuerdo.*
3. *Iniciado el proceso judicial, los padres podrán de común acuerdo solicitar su suspensión (...) El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.*
4. *Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar deberán ser aprobados por el juez, en los términos establecidos en el artículo anterior.*
5. *En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar en los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 80."*

"Artículo 79. Medidas Judiciales.

1. *A falta de pacto entre los padres, el Juez determinará las medidas que deberán regir las relaciones familiares tras la ruptura de su convivencia, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los artículos siguientes.*
2. *El Juez, de oficio o a instancia de los hijos menores de edad, de cualquier pariente o persona interesada o del Ministerio Fiscal, dictará las medidas necesarias (...).*
3. *El Juez podrá disponer las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas.*
4. *El incumplimiento grave o reiterado (...) podrá dar lugar a su modificación o a la exigencia de su cumplimiento (...).*
5. *Las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes (...).*

“Artículo 84. Medidas provisionales.

En los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, el Juez, a petición del padre, madre, hijos a cargo mayores de catorce años o del Ministerio Fiscal en su función legal de protección de los hijos menores o incapacitados, podrá acordar la adopción de medidas provisionales sobre las relaciones familiares de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Sección.”

4.2. Formación profesional del coordinador de parentalidad.

D’Abate, trabajador social, mediador familiar y coordinador de parentalidad de Canadá, propuso en 2013²¹ que se diera información a todos los actores que participan en los procesos de coordinación de parentalidad y que siguieran las pautas de formación expuestas por la AFCC (*Association of Family and Conciliation Courts*). También D’Abate adjudica una función de conocimiento, supervisión y control a los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales, para que la función de la coordinación de parentalidad se ejecute bajo patrones éticos.

D’Abate indicó en la AFCC (2013) como características profesionales del coordinador de parentalidad: *“Un profesional de la psicología o del trabajo social, auxiliar del ámbito legal, con formación y experiencia en mediación o en el campo de la salud mental. Debe tener gran experiencia práctica en la resolución de disputas parentales con alta conflictividad. Debe participar en actividades de formación continua para mantener las competencias profesionales del proceso de coordinación de parentalidad, participando en actividades educativas, consultas y supervisiones con otros profesionales o mentores”*

Propone al trabajador social, junto a otros profesionales, como figura profesional óptima para llevar a cabo los procesos de coordinación de parental. La formación de un trabajador social con especialización en conocimientos teóricos y prácticos en mediación familiar y experiencia en gestión de casos, conflictología y menores sería una figura idónea para ejecutar el rol de coordinador de parentalidad (junto con la especialización que el propio rol requiere).

La AFCC marca 12 directrices (2005)²² en las que proporciona pautas acerca de la práctica que han de seguir los coordinadores de parentalidad; sus obligaciones y conductas éticas; los estudios, la formación y la experiencia; la asistencia a tribunales que se encuentran desarrollando programas de coordinación de parentalidad mediante la elaboración de directrices que pueden seguir; y asistencia a tribunales, colegios profesionales e instituciones entre otras para promover la práctica.

Las directrices aparecen en el documento de la AFCC (2005) de forma detallada, pero aquí se expondrán de forma más concreta en el cuadro 1 (Rodríguez y Soto; 2014).

²¹ Declaración recogida en el artículo de Rodríguez y Soto (2015) <<El coordinador de parentalidad. Una propuesta desde dentro>>

²² Association of Family and Conciliation Courts Task Force on Parenting Coordination (2005). *“Guidelines for parenting coordination”*. Recuperado de <https://www.afccnet.org/Portals/0/PublicDocuments/Guidelines/AFCCGuidelinesforParentingcoordinationnew.pdf>.

Cuadro 1: Directrices de Coordinador de Parentalidad

- El/la CP debe estar capacitado/a, por estudios y formación, para llevar a cabo funciones de coordinación de parentalidad y debe seguir formándose a nivel profesional en este rol.
- El/la CP debe mantener la imparcialidad en el proceso de coordinación de parentalidad, aunque no sea neutral con respecto a los resultados de ciertas decisiones concretas. La imparcialidad implica evitar favoritismos o actuar de manera sesgada a nivel de palabra, obra o en apariencia, así como el compromiso de ayudar a ambas partes, sin favorecer a ningún individuo en concreto.
- El/la CP no debe prestar sus servicios en asuntos que presenten un claro nivel de intereses.
- El/la CP no debe ejercer un doble rol consecutivo.
- El/la CP debe informar a las partes de las limitaciones sobre confidencialidad en el proceso de coordinación de parentalidad. No se divulgará información fuera del proceso de coordinación de parentalidad, salvo por razones legítimas y con fines profesionales autorizados. Fuera de la coordinación de parentalidad, el/la CP debe mantener la confidencialidad de la información obtenida durante dicho proceso, salvo si el juzgado ordena lo contrario mediante resolución judicial o salvo si el juzgado ordena lo contrario mediante acuerdo escrito.
- El/la CP debe ayudar a las partes a reducir los conflictos perjudiciales y a promover el mejor interés de los niños en base a las funciones y rol profesional del/ la CP.
- El/la CP debe ejercer su función por pacto parental y/o resolución judicial, en las que se especificarán y definirán con claridad su ámbito de autoridad y sus responsabilidades.
- El/la CP debe propiciar la comprensión del proceso de coordinación de parentalidad por parte de los interesados de modo que puedan dar su consentimiento informando sobre el mismo.
- El/la CP debe informar claramente y explicar sus honorarios y cargos a las partes.
- El/la CP se comunicará con las partes, sus asesores jurídicos, los/as niños/as y el juzgado preservando en todo momento la integridad del proceso de coordinación de parentalidad y teniendo en cuenta la seguridad de los progenitores y de los niños/as. El/la CP tendrá acceso a las personas relacionadas con los distintos miembros de la familia y a los documentos necesarios para poder cumplir con sus responsabilidades.
- El/la CP debería tratar de facilitar el acuerdo entre las partes, según corresponda, en todas las disputas que pudieran surgir en relación con sus hijos/as. Si los progenitores no son capaces de alcanzar un acuerdo y si así lo establece el juzgado o si se autoriza mediante acuerdo de aceptación de coordinación de parentalidad, el/la CP debe tomar las decisiones oportunas con respecto a las cuestiones objeto de conflicto.
- El/la CP no debe participar en prácticas de marketing que contengan información falsa o engañosa. El/la CP debe asegurarse de que los anuncios relativos a su formación y competencias, los servicios ofrecidos o el proceso de coordinación de parentalidad sean veraces y exactos. El/la CP no debe afirmar que obtendrá ciertos resultados ni realizar promesas que impliquen favoritismo alguno con la finalidad de obtener beneficios económicos.

Fuente: AFCC, 2005; traducción de COPC, 2013²³: Directrices de Coordinador de parentalidad de la (AFCC, 2005; traducción de COPC, 2013). Traducida por el Grupo de Trabajo de Coordinación de Parentalidad de la Sección de Alternativas de Resolución y Gestión de Conflictos del Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), España, en colaboración con el Grupo de Trabajo de Coordinación de Parentalidad de Espacio Sistémico de Buenos Aires, Argentina.

²³ AFCC Task Force on Parenting Coordination (2003), "Parenting Coordination: Implementation Issues", *Family Court Review*, n.41, pp. 533-564.

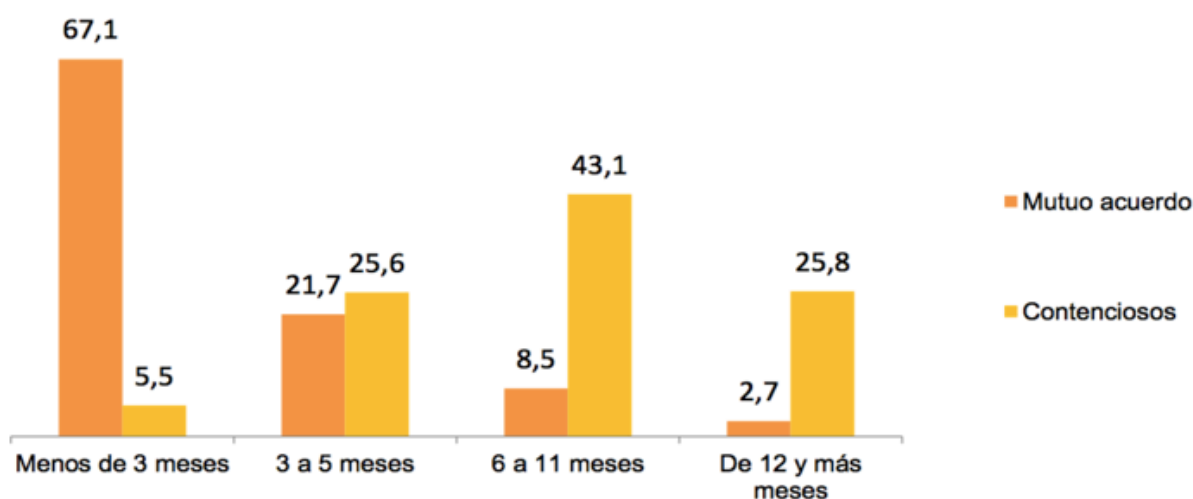
4.3. Nulidades, Separaciones y divorcios en España

Según muestran las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE)²⁴ sobre las nulidades, separaciones y divorcios en España durante el año 2016²⁵, se produjeron un total de 101.294 casos, suponiendo una tasa del 2,2 por cada 1000 habitantes. Se puede observar que la tasa representa un volumen importante de casos sobre un hecho social que afecta a un significativo porcentaje de población a nivel nacional.

En el año 2016, en comparación con el año 2015²⁶, se experimentó un descenso del 0,1%. El número de divorcios aumento un 0,3%, mientras que las separaciones disminuyeron un 6,4% y las nulidades con un 18,8%.

Centrándonos en los procedimientos de divorcios y separaciones, la duración media de los procedimientos de los divorcios fue de 4,7 meses, mostrándose ligeramente superior a la del año 2015, que fue de 4,6 meses. Y la duración media de los procesos de separaciones fue de 3,7 meses, siendo menor que la de los divorcios. Lo que podemos observar en el gráfico de la tabla 1.

Gráfico 1: Procedimientos según la duración del procesó (%). Año 2016



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Se puede observar en el gráfico 1 que el aumento de la duración del proceso en el tiempo se encuentra significativamente relacionado con el aumento de los procedimientos contenciosos. Tomando como referencia los datos registrados en 2015, vemos como aumentan los contenciosos en el año 2016. Además,

²⁴ Instituto Nacional de Estadística (INE), órgano autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía e Industria. Se encarga de la coordinación de la coordinación de los servicios estadísticos de la Administración General del Estado y de la vigilancia, el control y supervisión de los procedimientos técnicos de la misma.

²⁵ Instituto Nacional de Estadística (INE) (2017, septiembre). *Estadísticas de Nulidades, Separaciones y Divorcios; Año 2016*. Notas de prensa.

²⁶ Instituto Nacional de Estadística (INE) (2016, septiembre): *Estadísticas de Nulidades, Separaciones y Divorcios; Año 2015*.” Notas de prensa.

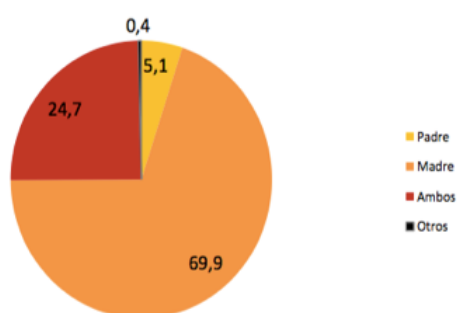
se puede observar como en un gran porcentaje de casos, los actores escogen la vía del mutuo acuerdo, pero siguen existiendo numerosos casos en los que el conflicto entre los cónyuges se cronifica, lo que establece una evidencia de la existencia de casos que se encuentran altamente judicializados y para los que los recursos intrajudiciales como la derivación a terapia familiar y la mediación familiar serán idóneos en función de las necesidades que presentes. Así como, el porcentaje de casos que presenten alta conflictividad la intervención de la coordinación de parentalidad. Por lo que resulta evidente el fomentar los tres servicios para poder ayudar a esas familias que están en procesos de separación o divorcio cronificado y proteger a los menores en caso de que los hubiera.

Con respecto al número de hijos, pensiones y custodia, los resultados describieron que el 43,0% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de separación o divorcio no tenían hijos. Porcentaje que fue similar al del año 2015. Sin embargo, un 47,2% tenían solo hijos menores de edad y de ellos el 5,2% hijos menores de edad y mayores dependientes. Y el 26,3% restante, tenía solo un hijo menor o mayor dependiente.

En el 57,6% de los casos (cónyuges de heterogéneo sexo) se asignó una pensión alimenticia, porcentaje similar al de 2015 (57,5%). El pago de la pensión alimenticia correspondió al padre en un 72,7% de los casos (75,9% en 2015), y el 4,8% a la madre (4,5% en 2015) y a ambos cónyuges en el 22,5% (19,6% en 2015).

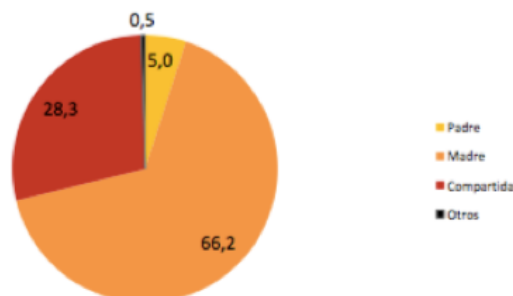
Y acerca de la custodia de los hijos menores, los resultados mostraron que en el 66,2% de los casos fue otorgada a la madre (69,9% en 2015), en el 5,0% se le otorgo al padre (5,1% en 2015) y en el 28,3% fue compartida (24,7 en 2015). En el 0,5% restante, la custodia fue otorgada a familiares o a otras instituciones.

Gráfico 2: Separaciones y divorcios según quien ejerza la custodia (%) 2015



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 3: Separaciones y divorcios según quien ejerza la custodia (%). 2016



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Las gráficas 2 y 3 representan los datos que se han expuesto anteriormente. En ellas podemos observar como la custodia compartida aumenta un 3,6% del año 2015 al 2016, lo que supone un mayor plan de parentalidad y mayor posibilidad de caer en el re-litigio parental. Así como el magistrado encargado de caso, siempre que se den las condiciones adecuadas, lo ideal será que los progenitores ejerzan la custodia compartida, sin embargo, se pueden dar casos en los que, debido al continuo litigio parental, esta sea difícil de aplicar. Para lo que el coordinador de parentalidad en aquellos casos de alta conflictividad, realizara una función clave para ayudar a los progenitores a desarrollar un plan de parentalidad ejemplar y proteger a los menores.

En Aragón, según el Instituto Aragonés de Estadística (IAE) en el año 2016²⁷ hubo un total de 3 nulidades, 96 separaciones y 2389 divorcios según número de sentencia. La Tabla 1 muestra que las nulidades en Aragón representan un menor número de sentencias con respecto a la separación y al divorcio. Las separaciones en el año 2016 experimentan una disminución en comparación con los tres años anteriores, en particular, se puede observar el gran descenso ocurrido del año 2015 a 2016, disminuyendo en 33 sentencias. Sin embargo, aumenta el número de separaciones contenciosas. Y con lo que respecta al divorcio, también se aparecía una disminución del año 2015 al 2016.

La Tabla 1, sirve para poder constatar estadísticamente la existencia de nulidades, separaciones y divorcios en Aragón.

Tabla 1: Total Nulidades, separaciones y divorcios según tipo de disolución

Aragón	2016	2015	2014	2013
Nulidad	3	2	2	1
Separación	96	129	113	109
Separación de mutuo acuerdo	85	123	96	97
Separación contenciosa	10	7	17	12
Divorcio	2389	2.853	2.382	2.149
Divorcio consensuado	1870	2.207	1.827	1.700
Divorcio no consensuado	519	647	555	449

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Para indagar en el número de sentencias de separaciones y divorcios en Aragón con hijos menores a cargo²⁸, se ha observado la estadística realizada por el instituto Aragonés de Estadística de 2016-2015. En la Tabla 2, se encuentran el número de sentencias, cuyos progenitores tienen hijos menores en común. Se puede observar empleando las Tablas 1 y 2, como el total de separaciones y divorcios según hijos menores, representan una cantidad importante, con respecto al total de divorcios y separaciones en Aragón. En el año 2016 de las 96 separaciones, 58 tenían hijos menores. Y de 2.389 divorcios, 1.159 sentencias tenían menores de por medio.

²⁷ Instituto Aragonés de Estadística (IAE) (septiembre, 2017). *Total de Nulidades, separaciones y divorcios según tipo de disolución.*

²⁸ Instituto Aragonés de Estadística (IAE) (septiembre, 2017). *Total de Separaciones y divorcios según número de hijos.*

Tabla 2: Total de Separaciones y divorcios según hijos menores.

	Aragón	España
2016		
Separaciones		
Solo con hijos menores	58	1.872
Divorcios		
Solo con hijos menores	1.159	45.882
2015		
Separaciones		
Solo con hijos menores	67	2.082
Divorcios		
Solo con hijos menores	1.345	45.541

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Con lo anteriormente dispuesto, queda verificado la existencia de numerosos casos de separaciones y divorcios en Aragón y el gran porcentaje de casos en los que existen menores.

Previamente, se ha alertado de la influencia del aumento de custodia compartida, en la conflictividad parental. Aragón, a través de la Ley 2/2010²⁹, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres fue pionera en el desarrollo de la custodia compartida.

Tabla 3: Separaciones y divorcios entre cónyuges de diferente sexo ejerciendo custodia compartida.

	Aragón	España
2016		
Separaciones		
Custodia compartida	25	557
Divorcios		
Custodia compartida	495	14.377
2015		
Separaciones		
Custodia compartida	29	605
Divorcios		
Custodia compartida	501	12.469

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Tomando como referencia las tablas 1 y 3, se puede ver que, a un significativo número de separaciones y divorcios, se otorga la custodia compartida³⁰. Como se ha referido anteriormente, cuando los indicadores de

²⁹ Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. Boletín Oficial del Aragón, núm. 111, pp. 14534 a 14542. Recuperado de <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=527724930404>

³⁰ Instituto Aragonés de Estadística (IAE) (septiembre, 2017). *Separaciones y divorcios entre cónyuges de diferente sexo según el cónyuge que ejerce la custodia*.

custodia compartida son tan altos hay una mayor probabilidad de que surja conflictividad entre los progenitores, debido a un requerimiento de mayor plan de parentalidad post-ruptura.

4.4. La conflictividad parental y sus consecuencias en los menores

Tras el análisis presentado anteriormente, acerca de las estadísticas realizadas por el INE sobre las nulidades, separaciones y divorcios en España durante el año 2016 y 2015, se muestra la realidad acerca de la existencia de factores idóneos y necesidades por los que se ha de fomentar la figura profesional del “coordinador de parentalidad” en España.

Se comenzará a centrar el análisis en las consecuencias que pueden reportar aquellos divorcios de alta conflictividad en los menores y aquellos procesos y técnicas que son apropiadas para ayudar a los progenitores a resolver sus conflictos y que perfiles profesionales son las más idóneas para desarrollarlos.

Es importante, remarcar la diferencia que establecen Rodríguez-Domínguez y Carbonell (2014) entre el divorcio legal y el divorcio emocional siendo este último el que cronifica el litigio con peleas constantes, tratando de vencer y desacreditar al otro progenitor, negando responsabilidades propias e impidiendo, en ocasiones, la protección de los menores. Autores como Rodríguez y Soto (2015) determinan que tras la experiencia profesional que han acumulado durante 30 años de oficio, han podido observar las carencias y problemas que los técnicos de la Administración de Justicia no podían resolver y jueces y juristas planteaban con desesperación. El problema más común que han diagnosticado es el de la superación emocional de la ruptura por parte de uno o de ambos cónyuges, lo que convertía el proceso en un “campo de minas” con derivaciones a procesos penales paralelos.

Los procesos de separación o divorcio de alta conflictividad, cuyos cónyuges presentan conflictos que se encuentran cronificados, consisten en familias que se encuentran sobre-asistidas, en las que los profesionales que han intervenido han notado la falta de herramientas y habilidades para ayudarles a poner fin a sus problemas. Se estima (Coates, Deutsch, Starnes, Sullivan y Sydlik, 2004; citados por Fariña, Parada, Novo y Seijo en 2017) que alrededor del 8% y 12% de los progenitores separados o divorciados continúan con alto nivel de conflicto. Por lo que la figura del profesional de coordinación de parentalidad, será aquella que posea la formación, las técnicas, las habilidades y los conocimientos necesarios para poder ayudar a estas familias a poner fin a sus conflictos y proteger el Interés Superior del Menor (2015).

Numerosos estudios (Camara y Resnick, 1998; Chess, Thomas, Korn y Mittelman, 1983; Kelly, 2005; Kelly y Emery, 2003) de los efectos que pueden manifestarse en los menores, como consecuencia de los divorcios, han resaltado que las continuas controversias post-ruptura entre los progenitores se correlacionan con una peor adaptación de estos

Raheb (2011) estableció, en su artículo <<El niño y las vicisitudes de la separación y/o divorcio>>, la existencia de un acuerdo entre distintas investigaciones acerca de que los problemas matrimoniales se encuentran asociados de forma directa o indirecta con determinados problemas que manifiestan los niños. Pero que no existe un acuerdo unánime entre cuales son aquellos conflictos matrimoniales que sí que afectan y cuáles son sus efectos. Resalta que varias investigaciones (Block and Morrison en 1981; Faulstich y LaCombe en 1998) hallaron que la discrepancia en la educación y crianza de los hijos era el principal factor que predice los trastornos de los niños y conlleva a una inadaptación global matrimonial.

La adaptación de los niños al divorcio varía en función de su estado de desarrollo, entre otras cosas. Las respuestas y estrategias empleadas ante el divorcio por los padres no son las mismas en niños pequeños que en niños adolescentes o mayores. Las empleadas en los niños pequeños dependen más de los padres, ya que estos poseen mayores limitaciones cognitivas y sociales. Por otro lado, los mayores presentan mayor madurez y son más autosuficientes. Es decir, la adaptación del niño ante la nueva situación familiar dependerá en función de cómo los progenitores gestionen la ruptura.

La investigadora dedica un apartado de su artículo a describir las reacciones que pueden presentar los niños ante el divorcio o separación parental según la edad:

- *De los 2 años y 6 meses a los 3 años y 0 meses;* los niños pueden presentar reacciones como regresión, inquietud, perplejidad y dependencia.
- *De los 3 años y 3 meses a los 4 años y 9 meses;* problemas en la autoestima y en la autoimagen, y desarrollos de sentimiento de responsabilidad de la separación parental.
- *Entre los 5 y los 6 años;* retardo en su desarrollo.
- *Entre los 6 y los 10 años;* pueden presentar tristeza, quejas somáticas, penas, retratamiento y mutismo, miedo y ansiedad, sentimientos de carencia afectiva, fantasías de reconciliación y conflictos de lealtad.
- *Entre los 10 y 12 años;* intensa cólera consciente, miedo y fobias, conflictos de lealtad y alineación con uno de los progenitores, sentimientos de aislamiento y soledad.
- *En la adolescencia:* Ansiedad, preocupación por su futuro como creador de pareja, preocupación económica, sentimiento de una experiencia dolorosa, cambios acelerados en la percepción de sus padres, conciencia aumentada de sus padres como objetos sexuales e interferencia con la entrada en la adolescencia.

Es realmente importante desarrollar figuras profesionales y procesos que ayuden a los progenitores a disolver sus conflictos, pensando en sus hijos y concienciarles acerca de las consecuencias que pueden reportar en ellos la cronificación del conflicto parental. Hay estudios (Raheb, 2011) que establecen que la alta proporción de divorcios ha producido un efecto considerable en la población clínica. El perfil del menor con progenitores divorciados o separados es frecuente como enfermo ambulatorio en el departamento de psiquiatría; el divorcio y la pérdida paterna pronostican las referencias de salud mental de forma significativa en los niños que se encuentran en edad escolar; el 30% de los adolescentes con padres divorciados cuando los menores tenían 7 años, han recibido psicoterapia, comparado en el 10% de adolescentes con familias unidas; el 40% de los niños que padecen una madurez joven debido a sus circunstancias han adoptado ayuda psicológica; y dentro del departamento de psiquiatría se puede observar como más del 75% de los pacientes, proceden de familias no integrales.

4.5. Experiencia Estadounidense y Catalana.

Dada la alta demanda de nulidades y divorcios, en los Estados Unidos (a mediados de los 80), se creó una figura (coordinador de parentalidad), a la cual los juzgados de familia derivarían aquellos casos de alta conflictividad, para ayudar a los progenitores a crear planes de parentalidad idóneos para el bienestar de los menores. La figura fue creada debido a que estos conflictos parentales presentaban problemas extremadamente difíciles de resolver a través de los métodos convencionales de terapia familiar y/o

mediación. En España, a pesar de que no contamos con regulación legal del proceso Coordinación de Parentalidad, se ha dado lugar alguna experiencia siendo pionera la comunidad autónoma de Cataluña y seguida por otras comunidades como por Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón, entre otras, comienza a asentarse la figura del coordinador de parentalidad, siguiendo las directrices marcadas en los Estados Unidos. Las directrices más populares, acerca del proceso de coordinador de parentalidad y del buen hacer del profesional, son las marcadas por la AFCC (*Association of Family and Conciliation Courts*) y la APA (*American Psychological Association*).

Numerosos estudios realizados por profesionales de la salud mental, destacan la mejora de los menores cuyos padres han realizado el proceso de coordinación de parentalidad³¹. Rodríguez- Domínguez y Carbonell (2014), en su artículo << Coordinador De Parentalidad: Nueva figura profesional para el psicólogo forense>>, hacen referencia a diversos estudios realizados que demuestran la incisión positiva que tiene en estos casos la figura profesional de un coordinador de parentalidad. Entre los diversos estudios nombrados, destacan: el estudio inédito de Johnston sobre el proceso de coordinación de parentalidad en Santa Clara, California. El estudio mostraba una disminución en el 25% de comparecencias ante el tribunal en casos ultimados por un coordinador de parentalidad. Otro estudio nombrado revelaba una reducción del 75% de los documentos judiciales relacionados con menores, además de un descenso del 50% en todos los expedientes presentados, colaborando en la reducción de conflictos y ayudando a los tribunales a reducir el tiempo y los recursos empleados (Henry, Fieldstone y Bohac, 2009). No obstante, a pesar que los estudios acerca de los efectos del proceso de coordinación de parentalidad son escasos, se ha podido observar un relevante descenso de los expedientes judiciales cuando los jueces dictaminaban el proceso de coordinación de parentalidad.

A pesar de los múltiples beneficios y aspectos positivos, a los que se puede hacer referencia cuando se habla de coordinación de parentalidad, se han realizado críticas negativas (Barsky, 2011) acerca del poder de decisión del coordinador de parentalidad. Entre ellas destacan la dualidad de roles del profesional, el no poder garantizar la seguridad e imparcialidad en aquellos casos en los que se perciba la existencia de violencia doméstica, entre otras. Por lo que habrá que seguir trabajando en pulir el perfil profesional del coordinador de parentalidad y otros matices del proceso, que con la experiencia de los países en los que la figura se encuentra más asentada y la puesta en práctica en España se podrá ir desarrollando.

En los procesos legales de separación y divorcio en España, se toman las decisiones oportunas con respecto a la guarda y custodia de los menores teniendo presente el principio del superior interés del menor (SIM).

4.6. Estudio de un caso práctico.

A continuación, se realizará un análisis acerca de los beneficios que ha reportado el coordinador de parentalidad a los casos de separación/divorcio con alta conflictividad en EEUU y en Cataluña, las ventajas que se han podido ya observar, y así, estableciendo aquellas mejoras que se podrán encontrar en Aragón con esta figura profesional.

³¹ (Kirkland y Sullivan, 2008 citado por Fieldstone, Carte, King y McHale, 2011; Vick y Backerman, 1996 citados por Rodríguez- Domínguez y Carbonell en 2014)

Para analizar los beneficios que aporta el proceso de coordinación de parentalidad, se mostrará un caso expuesto por Abilleira, Martínez- Valladares, Fariña, y Parada (2017) en su artículo <<Coordinación de Parentalidad en Ruptura de Pareja, un estudio de caso>>.

El caso presenta la siguiente situación: *“La familia se componía de un hijo menor de 10 años, un padre y una madre, divorciados desde hace 6 años. Los progenitores mantenían una relación conflictiva y altamente judicializado, que afectaba al bienestar de su hijo. Este hecho fue motivo por el que el juzgado de familia de referencia derivara a la familia al programa “Ruptura de Pareja no de Familia”³²”. Los técnicos del programa, tras la valoración del caso, propusieron como intervención la CP.”* Se ha de resaltar el dato de que la custodia del hijo se encontraba bajo la posesión de la madre.

El método empleado en el desarrollo del caso fue el siguiente:

En primer lugar, se dio paso a la lectura y al análisis del expediente judicial proporcionado por el juez. Tras la lectura y el análisis de la documentación, se procedió a realizar una sesión informativa de carácter individual con cada uno de los progenitores. En ella el coordinador de parentalidad del caso realizó: Una explicación del proceso de la coordinación de parentalidad y sus objetivos, empleando de apoyo la Guía de ayuda para la “Ruptura de Pareja, no de Familia” (Fariña et al., 2014). La guía empleada fue la del año 2014, año en la que se llevó a cabo el proceso, la guía aplicada a cada caso dependerá del año en el que se ejecute, empleando la última publicada. Tras la explicación, dio paso a la lectura, aclaración y firma del Acuerdo de Coordinación de Parentalidad por ambas partes. El acuerdo se constituye por la descripción de las funciones y competencias del coordinador, la confidencialidad del proceso y por el compromiso de los progenitores a cooperar, entre otras particularidades. Por último, entrego a cada uno de los progenitores de la Guía de ayuda para la “Ruptura del proceso, no familia” (Fariña et al., 2014).

Se dio comienzo a la evaluación inicial de los progenitores a través de una entrevista semiestructurada, realizada por el coordinador de parentalidad. A través de ella se obtuvo información acerca de la relación parental (el grado de comunicación y de conflicto existente, nivel de superación de la ruptura conyugal, forma en la que los progenitores practican la coparentalidad, entre otros), de la problemática exhibida por el menor con respecto a la ruptura y el conflicto interparental. Esta evaluación fue empleada, por el profesional, para trabajar las emociones contaminadas que presentaba un progenitor con respecto al otro y hacia su familia extensa.

Posteriormente a la evaluación inicial, previamente expuesta, se llevó a cabo la evaluación del menor. A través de una entrevista semiestructurada. El coordinador de parentalidad del caso apoyo la entrevista con el video de “Pobi tiene dos casas”³³ (Fariña, Arce, Real, Seijo y Novo, 2001). Mediante la evaluación, el profesional pudo analizar el vínculo paterno/materno-filial existente, la relación del menor con otros individuos significativos, el nivel de afección que padece debido al conflicto incesante de sus progenitores y

³² Programa para superar, de forma satisfactoria, las distintas etapas del proceso de separación y reducir las consecuencias negativas que la ruptura de la pareja puede desencadenar, principalmente en los menores.

³³ Fariña, F.; Arce, R.; Real, S.; Seijo, D.; y Novo, M. (2001). *Pobi ten dúas casas*. Santiago de Compostela: Cosellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

su adaptación general a su nueva estructura y funcionamiento familiar. El coordinador, además, pudo establecer las necesidades que el menor presentaba.

El proceso continuo con una intervención con los progenitores. En este caso se desarrollaron cuatro sesiones individuales de carácter psicoeducativo con cada cónyuge y una conjunta en la que el coordinador trabajó con ellos principalmente los sucesivos aspectos: la necesidad de mantener una relación parental posterior a la ruptura conyugal; los efectos que puede provocar la exposición del conflicto parental en todos los ámbitos de la vida de los hijos; reconocimiento de cada uno de los progenitores de sus prácticas inapropiadas de parentalidad; y tareas para poder restaurar la imagen positiva del otro cónyuge y beneficiar su relación con él.

También se llevaron a cabo labores de mediación y arbitraje para poner fin a situaciones de conflicto que contraponían a los progenitores. Se desarrollaron actividades extraescolares, compra y pago de ropa, cuestiones acerca de las estancias del menor con cada uno y económicas relativas a la pensión alimenticia y gastos extraordinarios, entre otros asuntos.

Por último, se efectuaron entrevistas y llamadas telefónicas de seguimiento a los padres, principalmente, y alguna al menor.

Los autores (Abilleira, et al., 2017) reflejaron en su artículo los resultados que se obtuvieron tras la participación de la familia en el proceso de coordinación, acerca de su situación y las conclusiones del proceso.

A través de la evaluación que se realizó a los progenitores, se pudo observar la presencia de cogniciones y emociones negativas que presentaban cada uno con respecto al otro. La incapacidad que exhibían, para establecer una comunicación adecuada entre ambos. Y la imposibilidad para llegar a acuerdos, para el empleo de prácticas parentales inapropiadas. Así como, un elevado grado de conflicto y una relación altamente judicializada.

Al comienzo de la coordinación de parentalidad, los progenitores mantenían dos causas judiciales abiertas. Ambas derivadas de denuncias interpuestas por el padre que, entre otras, culpaba a la madre de ejercer estrategias en las que ejercía influencia en el pensamiento del menor con el propósito de destruir la relación con el padre, hecho conocido como Síndrome de alienación parental. A su vez, la madre denunciaba al padre por no atender apropiadamente las necesidades que reportaba el menor y manifestaba que lo exponía a situaciones de riesgo, así como su falta en el pago de la pensión.

La situación dada en la familia, ya había comenzado a afectar al menor. Posicionándose a favor de su madre, no queriendo estar con el padre, ni con la familia de este. Además, había empezado a expresar síntomas de conductas disruptivas³⁴ en el hogar, sobre todo en el de su padre y en el centro escolar.

³⁴ Según el Portal de educación infantil y Primaria *“se llama conducta disruptiva a una actitud por parte del niño de falta de cooperación, insolencia, mala educación, agresividad, provocación, falta de respeto, dificultad para establecer relaciones interpersonales o de aprendizaje, impulsividad, entre otras conductas.”*. Recuperado de <https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/conducta-disruptiva.html>

Según expresan los autores, se realizaron las labores de mediación y de arbitraje, anteriormente nombradas, ya que el caso requería de una intervención psicoeducativa, para proteger al menor del conflicto interparental y lograr una idónea relación parental centrada en el interés del menor y que rebosase en su bienestar. Además de buscar con dichas labores el bienestar del menor, se procuró promover la mejora en la comunicación entre los progenitores reducir el conflicto y la judicialización del caso.

Gracias a la coordinación de parentalidad, se obtuvieron los resultados deseados para poner fin a la inestable situación familiar. *“Con la intervención se fue reduciendo paulatinamente el nivel de conflicto, a la par que se iba iniciando la colaboración parental positiva. Finalmente, se logró que el padre retirara las demandas judiciales interpuestas, que la madre no pusiera las que tenía previsto, y que acordaran las cuestiones económicas referentes a la pensión de alimentos y asuntos de inmuebles. Asimismo, tuvo lugar una mejora en la comunicación entre los progenitores, que favorece su capacidad para alcanzar acuerdos respecto a sus responsabilidades parentales, que de facto ya estas realizando. De esta manera, los resultados alcanzados se ajustan a los objetivos marcados por la AFCC, (2005), la APA (2012)³⁵ (cumplimiento de sentencias judiciales y cese de la litigiosidad, en un contexto de desconexión del conflicto). A la vez, se logró que se establecieran vínculos familiares saludables (Carter, 2011), que respetaran los derechos del hijo y la satisfacción de sus necesidades. Lo que motivo la recuperación de una sana y positiva relación del hijo con el progenitor no custodio y la familia extensa, en el que la madre desempeña un papel activo en el fortalecimiento de la misma. De manera destacada, señalar que ambos progenitores reconocieron los errores cometidos en el pasado en sus prácticas parentales y los efectos beneficiosos de la CP en su hijo; mostrando alta satisfacción y agradecimiento a la CP.”* (Abilleira, et al., 2017)

Tras el ejemplo de caso expuesto, podemos observar como a la familia participar en el proceso de la coordinación de parentalidad le ha reportado numerosos beneficios, así como contemplar cómo se desarrolla la práctica del proceso. Ha de señalarse que la práctica varía y que no existen unas únicas pautas que seguir.

³⁵ APA- American Psychological Association (2012). Guidelines for the practice of parenting coordination. *American Psychologist*, 67(1), 63-71.

5. Conclusiones.

Existe un número considerable de divorcios y separaciones en nuestra sociedad. España es uno de los países de la Unión Europea con la tasa más alta. En el caso de las parejas que experimentan las vivencias del proceso de divorcio y/o separación con hijos en común ven aumentadas sus preocupaciones, debido a que la ruptura puede ocasionarles un fuerte impacto emocional a estos.

Se dan procedimientos de mutuo acuerdo, en los que el litigio es muy leve o, incluso, inexistente. En cambio, coexisten con otros a los que se pone fin al conflicto a través de la vía contenciosa. Dentro de ellos se pueden encontrar diferentes niveles de conflicto, de cronificación y de particularidades de la situación. Cuando por la vía judicial no se logra llegar a un acuerdo y apaciguar el conflicto, esta misma vía deriva el caso a los recursos intrajudiciales con los que cuenta. La terapia de familia y la mediación son vías tradicionales que ayudan a las familias a llegar a acuerdos y a poner fin a sus conflictos; pero ¿Qué ocurre con aquellos casos que presentan alta conflictividad? ¿Los recursos tradicionales se encuentran preparados para asistirlos?, tanto la terapia familia como la mediación en dichas circunstancias no se encuentran preparadas para asistir a las familias que presenten dicho problema.

Para el porcentaje de casos que presentan situaciones semejantes a la anteriormente descrita, aparece la Coordinación de Parentalidad como un recurso idóneo para conseguir reducir el conflicto, incrementar la cooperación entre los padres y primordialmente proteger el Interés Superior del Menor.

La Coordinación de Parentalidad, surgió en los Estados hace dos décadas. Según la *Association of Family and Conciliation Courts* (AFCC) (Mayo, 2005) la define como *“un proceso alternativo de resolución de disputas centrado en los niños/as en virtud del cual un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver oportunamente sus disputas, educándolos con respeto a las necesidades de sus hijos/as y –previo consentimiento del juzgado- tomando decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial, o por el acuerdo de designación del/la coordinador/a de parentalidad”*.

El aumento de sentencias con custodia compartida, es un factor clave en la explicación del aumento de casos de alta conflictividad y frecuentes re-litigios entre los progenitores, debido a una implicación mayor por parte de los progenitores en el plan de parentalidad.

La coordinación de parentalidad encuentra su base en la mediación familiar, a pesar de ello se diferencian netamente. La coordinación de parentalidad no es tanto que lleguen a un acuerdo como la normalización de las relaciones entre los progenitores, de modo que los hijos no tengan que sufrir las consecuencias de sus desavenencias. Con respecto a los profesionales que se encuentran al frente de los procesos se encuentran diferencias, entre ellos: los coordinadores de parentalidad requieren una mayor especialización en temas de derecho procesal familiar y formación adicional en psicología e intervención social; se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias judiciales; el coordinador de parentalidad es una figura exclusivamente intrajudicial que emite un informe que podrá expandir sus efectos en el proceso judicial, en cambio, la mediación también se puede desarrollar de manera privada o extrajudicial; otra diferencia se encuentra en la duración del caso, mientras que en los conflictos tratados en mediación la

media de las sesiones para ponerles fin oscila entre 8 y 12 sesiones como máximo, la intervención del coordinador de parentalidad tiene una duración de tres meses con prórroga de otros tres.

El divorcio, para el niño, traza problemas reales, representa la exposición de un desacuerdo irremediable, la iniciación de una batalla en las que el acostumbrara a ser el objeto principal de discordia. Puede reaccionar o bien por una emoción intensa o por una actitud de fracaso en la que se siente implicado, o bien por posiciones agresivas cortejadas de sentimientos de abandono y hostilidad. Un divorcio de alta conflictividad puede tener consecuencias muy perjudiciales en los menores y estos requieren de una mayor protección en estas circunstancias.

El presente epígrafe, a través del estudio de la Coordinación de Parentalidad, partiendo desde las bases de la medicación, y análisis sobre la realidad del proceso en la sociedad ha procurado dar respuesta a: ¿Resulta ventajosa y beneficiosa la coordinación de parentalidad para los divorcios de alta conflictividad? ¿Protege a los menores de los litigios parentales post-divorcio? ¿Qué formación adicional precisa el trabajador social para ejecutar el rol de coordinado de parentalidad? ¿Tendría que fomentarse este rol profesional en Aragón?

Los resultados de la experiencia que se han podido observar en Estados Unidos han sido muy beneficiosos al conseguir la alta reducción de las relaciones con alta conflictividad en las familias y conseguir proteger a los menores de estas situaciones. Este hecho ha provocado que la figura de coordinador de parentalidad haya sido estudiada e implantada por otros países como Canadá o Argentina. En España en el año 2005, la Comunidad Autónoma de Cataluña inicio una prueba piloto para implementar la figura de Coordinación de Parentalidad intrajudicial. Los resultados fueron beneficiosos no solo para poner fin a las situaciones que presentaban las familias y lograr la protección de los menores del litigio parental, sino que también para reducir la saturación de los juzgados de familia. A raíz de la beneficiosa experiencia catalana, otras Comunidades Autónomas han comenzado a estudiar el proceso e implantarlo, como la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Aragón, entre otras.

El trabajador social, debido a las habilidades y técnicas que adquiere durante el grado universitario, como: la intervención social; la escucha activa; realización de entrevistas; función educativa; detección de abusos y negligencias hacia menores; gestión de conflictos; coordinación y gestión de casos; realización de informes; entre otras. Junto con un conocimiento legal, una especialización en mediación familiar y en coordinación de parentalidad puede ser un perfil idóneo para ejecutar el rol de coordinador de parentalidad.

En la capital aragonesa, el juez Dolado (actual Justicia de Aragón) del juzgado nº6 de familia, derivó un caso a coordinación de parentalidad. No hay una regulación estatal específica del proceso de coordinación de parentalidad, pero el magistrado puede emplear la base de otras normativas y leyes nacionales y supranacionales. Y en el caso de Aragón complementarlo también con regulaciones autonómicas. Tras la sentencia de Dolado el Colegio de Trabajadores Sociales planteó desarrollar un curso para formar a profesionales de esta disciplina en el rol de coordinadores de parentalidad. Tras la realización del estudio, desde este trabajo de investigación se apoya la promoción del curso y del fomento de la figura en los juzgados de la Comunidad Aragonesa. Se recomienda tomar como punto de partida las recomendaciones establecidas por la *Association of Family and Conciliation Courts* (AFCC) y por la *American Psychological Association* (APA) y las particularidades de la experiencia de la pionera Comunidad Autónoma de Cataluña.

Para concluir se dirá que tras el análisis realizado se considera que Aragón deberá trabajar en la implantación la coordinación de parentalidad, como un proceso idóneo para conseguir proteger el interés superior de los menores, evitando que sufran las consecuencias de los litigios parentales post separación.

6. Bibliografía.

- Abilleira, A., Martínez- Valladares, M., Fariña, F., y Parada, V. (2017, mayo). Coordinación de parentalidad en Ruptura de Pareja, un estudio de caso. *X Congreso (Inter) Nacional de Psicología Jurídica y Forense*. Sevilla, España (2017).
- Ahrons, C.R. (1994). *The good divorce: Keeping your family together when your marriage comes apart*. New York: Harper Collins.
- Ballard, F.; Burkhauser, M.; Ericson, S.; Lilja, E; Ross, T.; Sawyer, C. & Mindy E. (2010). *The Parenting Coordination (PC) project implementation and outcomes study report*. APA- American Psychological Association, Washington D.C.
- Barsky, A. E. (2011). Parenting coordination: The risks of a hybrid conflict resolution process. *Negotiation journal*, 27 (1), 7-27.
- Birnbaum, R. y Bala, N. (2010). Toward the differentiation of high-conflict families: An Analysis of social science research and canadian case law. *Family Court Review*, 48 (3), pp. 403-416.
- Bosqué, MC. (2002). *Guía de mediación escolar*. Barcelona, OCTAEDRO.
- Bustero, Daniel J. (2009): *La mediación. Claves para su comprensión y práctica*. Madrid, pp. 179-198.
- Camara, K. A. & Resnick, G. (1998). *Interparental conflict and cooperation: factors on moderating children's post-divorce adjustment*.
- Capdevila Brophy, C. (2016), *La coordinación de parentalidad. Una intervención especializada para familias en situación de alta conflictividad crónica post-ruptura de pareja*. Anuario de Psicología 46, 41-49.
- Carter, D. (2011). *Parenting coordination: a practical guide for family law professionals*. New York: Springer Publishing Company.
- Caurín, P., Ramo, C., y Vivas, I. (2011). *Guía-marco de la Mediación en Aragón*. Zaragoza: Gobierno de Aragón.
- Chess, S., Thomas, A., Korn, S. & Mittelman, M. (1983). Early parental attitudes, divorce, and separation, and young adult outcome: findings of a longitudinal study. *American Academy of Child Pyschiatry*, 22(1), 47-51.
- Coates, C. A., Deutsch, R., Starnes, H., Sullivan, M.J. y Sydlik, B. (2004). Parenting Coordination for High-Conflict Families. *Family Court Review*, 42, 246-262.

- Compañ, V., Feixas, G., Muñoz, D., Montesano, A. (2012, octubre): *El Genograma en Terapia Familiar Sistémica*. Universidad de Barcelona; Facultad de Psicología.
- D'Abate, D. (2005): *Parenting Coordination: A New Service for High Conflict Divorcing Families. Intervention*, Junio.
- D'Abate, D. (2013): Entrevista a Dominic De Abate director del Consensus Mediation Center Montral.
- Eddy, B. (2011). BIFF: Quick responses to high conflict people. *Their personal attack, hostile email and social media meltdowns*. Scottsdale, Arizona: High Conflict Institute Press.
- Fariña, F.; Arce, R.; Real, S.; Seijo, D.; Novo, M.; y Vázquez, M^a J. (2014). *Guía de ayuda para la "Ruptura de Pareja no de Familia"*. Mediación Familiar y otros servicios de apoyo. Santiago de Compostela: Editorial Aldavira.
- Fariña, F.; Parada, V.; Novo, M.; y Seijo, D. (2017). El coordinador de parentalidad: Un análisis de las resoluciones judiciales en España. *Acción psicológica*, 14 (2), 157-170.
- Fernández, M. (1999). Aspectos positivos y negativos del conflicto. En J. F. Morales y S. Yubero (Eds.) *El grupo y sus conflictos* (pp. 25-46). Ciudad Real: Universidad de Castilla- La Mancha.
- Fisher, R.; Ury, W. y Patton, B. (1999). *Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder*. Barcelona, Gestión 2000.com.
- García- Herrera, A. (2016): Reestructuración de la familia tras la separación parental: mediación intrajudicial, mediación en el punto de encuentro familiar y coordinación de parentalidad. *InDret 2/2016, revista para el derecho*.
- Gardner, R.A. (1985), Recent trenes in divorce and custody litigation. *Academy forum*, 29(2), pp. 3-7.
- Garrity, C. B. y Barris, M.A. (1994). *Caught in the middle: Protecting the children of high-conflict divorce*. New York, NY: Lexington Books.
- Heatherington, E.M. (2003). Intimate pathways: changing patterns in close personal relationships over time. *Family Relations*, 52, 318-331.
- Henry, W.J.; Fieldstone, L.; & Bohac, K. (2009). Parenting coordination and courts relitigation: A case study. *Family Courts Review*. 47(4) 682-697.
- Johnson, J. (1994). The future of children. *Children and Divorce*, 4(1), 165-182.
- Kelly, J. B. & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. *Family Relations*, 52(4), 352-362.

- Kelly, J.B. (2005). Developing beneficial parenting plan models for children following separation and divorce. *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 19(2), 237-254.
- Kirkland, K. & Sullivan, M. J. (2008). Parenting coordination (PC) practice: "A survey of experienced professionals". *Family Court Review*, 46(4), 662-636.
- Logos Media M Q Mediar S.L. (2014): *Servicio de Coordinación de Parentalidad en el partido Judicial de Sabadell*. Barcelona.
- MacCoby, E.E. y Mnookin, R.H. (1992). *Dividing the child: Social and legal dilemmas in custody*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Macho Gómez, Carolina (2014): *Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del <<movimiento ADDR>> en Estados Unidos y su expansión a Europa*. Universidad de Cantabria. ADC, tomo LXVII, 2014, fase. III.
- Marín, M., Dujo, V. y Horcajo PJ. (2017) *Estudio comparativo de las decisiones de los magistrados del Tribunal Supremo español y los resultados de estudios empíricos sobre las implicaciones psicológicas en menores en situación de guarda y custodia compartida*.
- McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985). *Genogramas en la evaluación familiar*. Barcelona: Gedisa (3a ed. 2000).
- Raheb, C. (s.f). *El niño y las vicisitudes de la separación y/o divorcio*.
- Rodríguez Dávila, M. D., y Soto Esteban, R. (2015). El Coordinador de Parentalidad. Una propuesta desde dentro. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 15, 171-187.
- Rodríguez- Domínguez, C.; y Carbonell, X. (2014). Coordinador de Parentalidad: Nueva figura profesional para el psicólogo forense. *Papeles del Psicólogo*, 35(3), 193-200.
- Segura, C.; Gil, MJ. y Sepúlveda, MA. (2006). El Síndrome de alienación parental: una forma de maltrato infantil. *Cuadernos de Medicina Forense*, 43-44.
- Vick, M., & Backerman, R. (1996). "Mediation / arbitration, surveys of professionals and clients". Presented at the Boulder Interdisciplinary Committee on Child Custody, Boulder, Colorado.
- Vinyamata, E. (2006). *"Aprender mediación"*, Paidós. Barcelona.

7. Índice de tablas y gráficos.

- Cuadro 1. Directrices de Coordinador de Parentalidad.
- Gráfico 1. Procedimientos según la duración del proceso (%). Año 2016.
- Gráfico 2. Separaciones y divorcios según quien ejerza la custodia (%) 2015.
- Gráfico 3. Separaciones y divorcios según quien ejerza la custodia (%) 2016.
- Tabla 1. Total Nulidades, separaciones y divorcios según tipo de disolución.
- Tabla 2. Total de Separaciones y divorcios según hijos menores.
- Tabla 2. Separaciones y divorcios entre cónyuges de diferente sexo ejerciendo custodia compartida.